

Análisis de casos emblemáticos
de violaciones a los Derechos Humanos

Caso: Veto publicitario
Veto a la libertad de expresión

Por: Andrés Gómez Vela



OBSERVATORIO BOLIVIANO DE
DERECHOS HUMANOS



FUNDACION NUEVA DEMOCRACIA

El documento de análisis que se publica a continuación ha sido elaborado por Andrés Gómez Vela (investigador, periodista y abogado), es de exclusiva responsabilidad del autor y no expresa necesariamente el pensamiento de los editores o del Observatorio Boliviano de Derechos Humanos de la Fundación Nueva Democracia. Sin fines comerciales o de lucro, se autoriza la reproducción total o parcial del contenido, siempre que se indique la autoría y la fuente.

Análisis de Casos Emblemáticos de Violaciones a los Derechos Humanos
Caso: Veto publicitario Veto a la libertad de expresión
Número 3 – Noviembre de 2016

© 2016 Reservados todos los derechos

Fundación Nueva Democracia
Calle Velasco esq. La Riva N° 700, piso 3°, of. N° 301
Tel. / Fax: (591-3) 3353354 - 3353357
www.nuevademocracia.org.bo
Santa Cruz - Bolivia

Depósito Legal: N° D.L. 8-1-500516
ISBN: 978-99974-52-45-0

Fundación Nueva Democracia
Calle La Riva esq. Velasco N° 700, piso 3°, of. N° 301
Tel. / Fax: (591-3) 3353354
www.nuevademocracia.org.bo/Observatorio
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

Contenido

1. Presentación.....	5
2. Consideraciones Previas.....	9
3. El dinero Público contra la libertad de expresión	10
4. ¿Cómo justifican los gobernantes el veto publicitario? ..	74
5. Principios democráticos desconocidos por el Veto Publicitario.....	76
6. Normas internacionales y nacionales y derechos violados	86
7. Consideraciones Finales.....	94
8. ¿Por qué el Estado debe proteger a medios y periodistas?	98
9. Conclusiones.....	117

Presentación

La “Fundación Nueva Democracia mediante” el “Observatorio Boliviano de Derechos Humanos”, tiene la satisfacción de poner a disposición de los amables lectores, el tercer número de nuestra serie de “Análisis de casos emblemáticos violaciones a los derechos humanos”, publicaciones que venimos realizando desde el mes de marzo de 2016. El presente Análisis de Caso emblemático ha sido rotulado; “Veto publicitario, veto a la Libertad de Expresión”, mismo que es de autoría del investigador, periodista y abogado; Andrés Gómez Vela, quien ha desarrollado su labor de investigador de una manera independiente, profesional e imparcial.

Su investigación se encuentra dividida en los siguientes nueve capítulos: **1)** Consideraciones previas, **2)** El dinero público contra la libertad de expresión, **3)** El gobierno “veta” el apoyo económico de la opinión pública a ERBOL, **4)** ¿Cómo justifican los autores el veto publicitario?, **5)** Principios democráticos desconocidos por el veto publicitario, **6)** Normas internacionales y nacionales y derechos violados, **7)** Consideraciones Finales, **8)** ¿Por qué el Estado debe proteger a medios y periodistas?, y **9)** Conclusiones, destacando en las mismas que la Libertad de Expresión es un derecho humano indispensable para el funcionamiento de sistemas democráticos pluralistas y

deliberativos, donde se protege y fomenta la libre circulación de información, ideas y expresiones de toda índole.

Hemos decidido realizar la serie de estudios de “Casos Emblemáticos” de Violaciones a los Derechos Humanos sucedidos en Bolivia, dentro de un contexto en el que los expertos en la materia han afirmado que la Justicia boliviana se encuentra atravesando por su peor crisis, por lo que nuestros estudios tienen por objeto desnudar las falencias y las aberraciones cometidas por la justicia boliviana, para contribuir al debate jurídico y de esta manera incidir en la plena vigencia del “debido proceso”, el “Estado constitucional de derecho democrático” y el “control de convencionalidad”, ya que debemos adecuarnos a los diversos convenios y tratados internacionales de los cuales es signatario el Estado boliviano.

La Fundación Nueva Democracia es una institución sin fines de lucro que desde el año 2008 viene trabajando de manera decidida en la promoción de los valores democráticos en Bolivia, dentro de nuestra visión aspiramos a vivir en una sociedad libre, moderna, pluralista e inclusiva, basada en el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos y las libertades públicas e individuales de los mismos. En este marco, nuestra misión es consolidar la democracia, el Estado de derecho y la igualdad de oportunidades para todos los bolivianos.

Es con el espíritu de consolidar nuestros fines, que la Fundación Nueva Democracia en Septiembre del año 2011 implementa el Observatorio Boliviano de Derechos Humano, desde entonces, gracias al trabajo que se viene ejecutando de manera ininterrumpida, a la fecha hemos publicado 12 “Reportes Cronológicos de Violaciones a los Derechos Humanos sucedidas en Bolivia” y el tomo N1º de la serie de “Análisis de casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos”.

Con este nuevo aporte, la **Fundación Nueva Democracia** mediante el **Observatorio Boliviano de Derechos Humanos** cum-

ple con su labor de coadyuvar en la consolidación de los principios y valores de la democracia en Bolivia, para que todos los bolivianos vivamos en una sociedad libre, justa, moderna, pluralista e inclusiva.

Santa Cruz de la Sierra, noviembre de 2016

Oscar Ortiz Antelo
Presidente del Directorio
FUNDACIÓN NUEVA DEMOCRACIA

Veto publicitario, veto a la Libertad de Expresión

Andrés Gómez Vela¹

1. Consideraciones previas.

Es sabido que la calidad de la democracia depende de la calidad de la información y la calidad de la información, de la calidad de los periodistas; y la calidad de los periodistas, de su libertad, independencia y formación.

Paralelamente al periodista, los medios de comunicación son indispensables en la difusión de informaciones y circulación de opiniones. De esta manera, la diversidad de medios desemboca en el pluralismo, concepto enriquecedor de la opinión y la información, indispensables para el funcionamiento de la democracia.

También es sabido que el Estado, a través del gobierno de turno y otras autoridades, debe ser el garante de la libertad de expresión, lo que significa que los gobernantes están obligados a crear contextos legales y reales para la materialización de este derecho.

1 Andrés Gómez Vela es periodista y abogado, docente en las carreras de Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana de La Paz (UCB) y Universidad Mayor de San Andrés (UMSA); autor de los libros: "MedioPoder, derecho a la información" (propuesta a la Asamblea Constituyente); "No levantarás falsos testimonios, ética para hacer un buen periodismo"; y columnista del periódico paceño Página 7.

Asumen esta obligación para asegurar en consecuencia el libre flujo de informaciones y opiniones hacia la sociedad, donde conviven los titulares de la libertad de expresión con sus diferencias culturales, políticas o ideológicas. Éstos requieren, para realizarse como seres humanos y ciudadanos, diversidad de medios de comunicación y pluralidad de opiniones.

No obstante, un Estado democrático y constitucional también debe limitar, pero sin excesos, la libertad de expresión y el derecho a la información con el fin de evitar posibles abusos de medios o periodistas contra el ciudadano. A la vez, también debe prevenir probables excesos de gobernantes o poderes fácticos contra el ciudadano, los medios y periodistas.

Sin embargo, en estos últimos años, el Estado Plurinacional, a través del Poder Ejecutivo, se convirtió en un gran peligro para la libertad de expresión debido a que tomó algunas decisiones y acciones en contra-ruta a los valores de la democracia.

Una de esas acciones del gobierno de Evo Morales fue haber recurrido al dinero público para presionar a periodistas y medios de comunicación. El mecanismo que usó, invisible en un primer momento, visible y abierto después, fue la prohibición de difundir publicidad y propaganda gubernamental en medios independientes o críticos.

2. El dinero público contra la libertad de expresión

Desde antes de la aprobación de la nueva Constitución Política de Estado, que fue en febrero de 2009, el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) comenzó a usar la propaganda y publicidad gubernamental para presionar a medios de comunicación, aunque en ese primer momento fue poco perceptible.

Premió a los que “informaban en favor” suyo y castigó a los que, en su criterio, hacían política en pro de la oposición o fuerzas políticas “neoliberales”, “imperialistas”, “colonialistas”.

Esta estrategia de palo y zanahoria tuvo éxito porque “convirtió” a medios con línea editorial abiertamente contraria al gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) en medios condescendientes. Este cambio se produjo entre 2006 y 2012.

Según fuentes empresariales y políticas, hubo otras formas de presión, entre ellas, la afectación de intereses patrimoniales de propietarios de medios, la cooptación directa e indirecta y la compra de medios.

Este modus operandi se encuentra ampliamente descrito en el libro “Control Remoto” del periodista Raúl Peñaranda, quien investigó y reveló cómo el gobierno terminó por controlar La Razón, ATB, PAT² y otros medios.

2.1. Cables difundidos por WikiLeaks alertaron sobre los medios en Bolivia.

Correos electrónicos enviados por la Embajada de Estados Unidos en La Paz a Washington revelaron las complejas relaciones del gobierno de Evo Morales con grandes Medios de Comunicación³ desde los primeros años de su gestión.

El Poder Ejecutivo boliviano destacó la credibilidad de éstos cables a tal punto que el Ministerio de la Presidencia lo convirtió en libro: “BoliviaLeaks, La Injerencia Política de Estados Unidos contra el Proceso de Cambio (2006 - 2010)”. Esta publicación fue presentada el jueves 14 de julio de 2016 por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana⁴.

2 Peñaranda, Raúl, Control Remoto.

3 Bolivia: Morales manipula a los propietarios de los medios, <http://wiki-leaks.vicepresidencia.gob.bo/BOLIVIA-MORALES-MANIPULA-A-LOS>

4 Un boletín oficial de Palacio de Gobierno lo define como el libro que resume una investigación sobre los cables difundidos por WikiLeaks respecto a la intromisión del país del norte en el proceso de cambio, especialmente durante el golpe cívico-prefectural ocurrido el año 2008. Iván Mérida, uno

El contenido de los correos difundidos por WikiLeaks y que fueron escritos entre el 2008 y 2009 describen cómo percibía la Embajada estadounidense el escenario mediático en aquel tiempo.

C O N F I D E N T I A L LA PAZ 002623

SIPDIS E.O. 12958: Dec: 12/04/2018

ETIQUETAS: PREL PGOV ODIP KPAO OIIP eaid BL

ASUNTO: BOLIVIA: MORALES MANIPULA A LOS PROPIETARIOS DE LOS MEDIOS⁵

REF: LA PAZ 2569

Clasificado por: Consejera de la sección de Asuntos Públicos (PAS) : Denise Urs por razones 1,4 b, d

1. (C) Resumen: El presidente boliviano, Evo Morales, sigue en la ofensiva contra los medios de comunicación bolivianos, como parte de una larga campaña. A través de agresiones verbales y financieras, el gobierno de Bolivia está tratando de manipular la forma en que se informa en este país. El Gobierno de Bolivia utiliza tácticas

de los investigadores, reveló que la injerencia de los Estados Unidos tiene una larga data en Bolivia, pero en el libro se hace referencia a los más de 1.299 cables informativos que fueron filtrados el 2010 por WikiLeaks.

WikiLeaks es una organización mediática internacional sin fines de lucro, que publicó a través de su sitio web informes anónimos y documentos filtrados con contenido sensible en materia de interés público. "Este texto hace uso de los cables informativos filtrados por WikiLeaks, que al ponerse a disposición pública, representan un caudal informativo que tenía que ser investigado y revisado, para verificar si las versiones de conspiración tenían o no asidero", señaló Mérida en una entrevista en la Red Patria Nueva. El libro se divide en cuatro capítulos: los militares, la democracia, lucha contra el narcotráfico, la doctrina del denominado Palo y la Zanahoria y el papel del diplomático más controversial de esta época como fue el exembajador Philip Goldberg.

- 5 Bolivia: Morales manipula a los propietarios de los medios, <http://wikileaks.vicepresidencia.gob.bo/BOLIVIA-MORALES-MANIPULA-A-LOS>

financieras, tales como golpear a los medios de comunicación con cuentas fiscales o gastar grandes sumas de dinero en publicidad, para influir en las líneas editoriales y para crear una nube sobre la credibilidad y veracidad. También utiliza sus propios medios de comunicación para ampliar y reforzar el culto alrededor de Morales. Fin de resumen.

Gobierno de Bolivia al ataque

2. (SBU) La última ronda de ataques políticos en contra de los medios de comunicación (REFTTEL) es parte de una lucha vigente. El presidente Evo Morales se refiere continuamente a los medios de comunicación como su "principal oposición," y sus "enemigos". A pesar de sus expresiones incisivas más recientes, Morales suele añadir que no está en contra de los periodistas, sino contra los dueños de los medios. Por meses han circulado rumores, de que con el fin de proteger al presidente de sus "enemigos", los inversionistas venezolanos están tratando de comprar diversos medios, como sería el caso del diario La Prensa, que es el segundo más grande de La Paz, pero hasta ahora no hay evidencia de que se hubiesen realizado las ventas.

3. (C) Lo que hace el gobierno de Bolivia es intimidar a los medios de comunicación por medio de procedimientos judiciales y mostrando cierto favoritismo que se percibe en la forma en que se distribuye su importante presupuesto publicitario, buscando inclinar a la prensa en favor de sus políticas. Consideremos un ejemplo: el gobierno de Bolivia envió a La Razón, el periódico más grande de la ciudad de La Paz, una cuenta por casi 5 millones de dólares "por haber evadido impuestos durante el año 2006". Funcionarios de alto nivel del diario La Razón expresaron sus especulaciones, a oficiales de la

Sección de Asuntos Públicos de la Embajada de Estados Unidos, que demandar el pago de estos impuestos podría haber sido un intento de intimidar al periódico para que desplazara su línea editorial, que en general estaba contra el gobierno de Bolivia. La deuda por impuestos también tendría el efecto de reducir el valor del diario, para que pueda ser vendido a un precio inferior.

4. (C) La nacionalización de algunas empresas también ha ayudado en el plan del gobierno de Bolivia con relación a los medios. El 1 de mayo, el presidente Morales nacionalizó al gigante de las comunicaciones: ENTEL, uno de los anunciantes más grandes de Bolivia. El gobierno de Bolivia ha sido acusado de utilizar los enormes presupuestos de publicidad de las empresas nacionalizadas, tales como Entel, para premiar a los medios de comunicación que publican artículos a favor del gobierno y para castigar a los que no lo hacen.

5. (C) Los grandes medios de comunicación en Bolivia aceptan publicidad pagada directamente por el gobierno, con una sola excepción, que es la cadena de televisión UNITEL. Incluso aceptan anuncios que califican a los medios de comunicación como "mentirosos" y que sugieren que los bolivianos no deben confiar en lo que leen, ven o escuchan en la prensa.

Irónicamente, estos mismos medios de comunicación, frecuentemente, expresan su posición contraria al gobierno en su línea editorial y lo hacen durante las mismas transmisiones o en los mismos periódicos que llevan los anuncios contra los medios de comunicación. Funcionarios de la Sección de Asuntos Públicos (PAS, por su sigla en inglés) han consultado a los directores de los medios de comunicación sobre cuál es la razón para seguir publicando los anuncios del gobierno de Bolivia,

y todos ellos han manifestado que sin ese ingreso sería más difícil sobrevivir en un mercado muy competitivo.

¿Quién posee los medios de comunicación?

6. (SBU) Aunque la mayoría de los medios de comunicación en Bolivia son de propiedad privada, es difícil determinar quiénes son sus dueños. No hay documentos públicos que acrediten la propiedad, y las empresas o personas que poseen la participación mayoritaria pueden vender sus partes sin dejar rastros en documentos públicos. Hay continuos rumores sobre la posible venta de estos medios, pero la prueba de esas ventas es nula y los rumores suelen desaparecer rápidamente.

7. (C) Otro tema de preocupación es la influencia del dinero venezolano en los medios de comunicación. La Sección de Asuntos Públicos (PAS) se entera continuamente de que algunos empresarios venezolanos están negociando la compra de una de las cadenas de televisión (ATB, por sus problemas de liquidez), del mismo modo con los numerosos periódicos que tienen problemas financieros. Otros afirman que es mera especulación. Sin embargo el dinero venezolano ha construido una red de medios de comunicación llamada Radio y Televisión Popular, esta red es técnicamente fuerte, está a favor del gobierno, es populista y se encuentra en las principales ciudades bolivianas.

8. (C) El segundo diario más grande de La Paz, La Prensa informó que Morales ha reformado los medios de comunicación de propiedad estatal en un esfuerzo para expandir la popularidad y el culto del presidente. El gobierno de Bolivia creó una red de radios comunitarias, una agencia de cable por Internet (ABI), y amplió el alcance de la televisión estatal, el Canal 7, con una donación de Venezuela de 9,000,000 de dólares para

instalar 120 repetidoras. También existen informes que dicen que el presupuesto para las operaciones de Canal 7 ha crecido en 3,8 millones de dólares y que los procedimientos normales de adquisición han sido obviados. La oposición política denuncia que el Presidente es asesorado por un equipo de comunicaciones de Venezuela, así como de otros países.

9. (C) Bajo el gobierno de Morales, Canal 7, la Empresa Nacional de Televisión, se ha convertido en una de las principales herramientas entre los medios , a menudo presenta información sesgada y engañosa , de forma abierta realiza propaganda a favor del presidente y sus políticas y a la vez de desacredita a la oposición. Canal 7 tiene la intención de ampliar su alcance e influencia en todo el país. El director de Canal 7 anunció que está preparando su conversión a tecnología digital, una inversión costosa para los estándares bolivianos. Hace un año, Canal 7 anunció la recepción de una donación de equipos provenientes de fuentes desconocidas, para mejorar el alcance en los departamentos de La Paz y Santa Cruz, y que había comprado 50 repetidoras que deben ser distribuidas en lugares remotos de occidente y la Amazonia. Después de la visita a Bolivia del presidente de Irán, a principios de 2007, algunas publicaciones informaron que Canal 7 recibiría una importante donación (algunos informaron que se trataría de una inversión de varios millones de dólares) para fortalecer la cadena de televisión del Estado, pero no ha habido ninguna indicación de que esta se realice. Los medios de comunicación iraníes informan que esta donación se hará en forma de programación en español. Canal 7 también transmite programación de Telesur, que es una red de propiedad del gobierno venezolano, como parte de su programación diaria regular.

¿A quién pertenece la prensa escrita?

10. (SBU) Dos grandes conglomerados de medios parecen ser los propietarios de los medios de comunicación en Bolivia: el grupo español Prisa (propietario del diario español El Diario) que es propietario de La Razón, ATB, un canal de televisión privada, y Extra un diario sensacionalista y barato. El otro conglomerado de medios pertenece mayoritariamente a las familias Canelas y Rivero que poseen la mayoría de los principales diarios nacionales en todo el país. En La Paz, son propietarios de La Prensa; en Santa Cruz, del principal diario El Deber; en Cochabamba, el principal diario Los Tiempos, sino que también poseen el único diario en El Alto, El Alteño; en Sucre, el Correo del Sur; en Potosí, El Potosí, y en Tarija, El Nuevo Sur. Los periódicos del grupo Canelas-Rivero son, en general, críticos con el Gobierno. Otros periódicos pequeños, de propietarios independientes, deben luchar por ingresos por publicidad del sector privado y, a menudo, deben aceptar la publicidad del gobierno para poder seguir imprimiendo.

Comentario

11.(C) Las perspectivas para los medios de comunicación en Bolivia son cada vez más adversas . El gobierno de Bolivia, con la ayuda de grandes inversiones de Venezuela, ha recurrido a presiones financieras en un intento de cambiar la línea editorial de los medios de comunicación, y para acelerar o provocar su venta. Los rumores regulares sobre la venta inminente de los medios de comunicación puede ser una cortina de humo para cubrir una venta real, puede ser también un truco para asustar a los medios de comunicación, o puede ser simplemente producto de la imaginación de los dueños de los medios de comunicación. Siempre es posible, sin

embargo, que los medios de comunicación se vendan sin conocimiento del público, cambiando las perspectivas de la formación de opinión en el país. Fin de comentario. LAMBERT⁶

2.2. Evo Morales: "Ahora quedan 10% ó 20% de (medios) opositores".

El "proceso de cambio" en gran parte de los medios de comunicación bolivianos lo confirmó el mismo Presidente Evo Morales, en una entrevista publicada por el periódico El Deber el 24 de septiembre de 2013.

"Usted dijo que los periodistas somos su principal oposición. Ahora se dice que PAT, Full TV y ATB son amigables con el Gobierno, ¿esa percepción también cambió?", preguntó el periodista del matutino cruceño en aquella ocasión.

"También está Gigavisión... Antes sentía que el 80 ó 90% de los medios eran mis opositores. Ahora quedan 10% ó 20% de opositores", respondió el Presidente.

La asfixia económica destinada a encarrilar a medios en el "proceso de cambio", comenzó mucho antes del 2012.

Educación Radiofónica de Bolivia (Erbol), que proyectó y trabajó el Proceso de Cambio desde antes del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), empezó a sufrir la presión en 2010, cuando denunció entre el 7 y 8 de mayo de ese año el asesinato de dos jóvenes (Mario Fidel Hernani Jiménez, de 19; y David Calizaya Mamani, 16) en la protesta social de Caranavi, La Paz, que exigía al gobierno cumplir su promesa electoral de instalar una planta de cítricos en esa población⁷.

6 Bolivia: Morales manipula a los propietarios de los medios, <http://wiki-leaks.vicepresidencia.gob.bo/BOLIVIA-MORALES-MANIPULA-A-LOS>

7 <http://www.fmbolivia.tv/dos-familias-llevan-un-ano-de-sacrificios-deudas-y-viajes/>

Hasta la fecha, se desconoce a los autores del asesinato. Testigos y pobladores del lugar aseguran que las balas salieron de filas de la Policía. En ese tiempo, el ministro de Gobierno era Sacha Llorenti⁸ y la Fiscalía no halló a los responsables. La crítica de ERBOL por este crimen incomodó al gobierno.

El 14 de agosto de 2013, El Deber denunció represalias del Poder Ejecutivo contra medios críticos mediante la reducción de la pauta publicitaria estatal.

El matutino cruceño publicó ese día una información titulada: "Revelan reunión para un supuesto veto a medios"⁹. La nota periodística dice:

El Gobierno habría tomado represalias contra tres medios de comunicación que critican su gestión. Mediante el Ministerio de Comunicación se instruyó mantener la prohibición de publicidad estatal en el diario paceño Página Siete y reducir pautas en dos redes televisivas de alcance nacional. El Ejecutivo negó estas decisiones¹⁰. Dos fuentes gubernamentales revelaron a EL DEBER la supuesta decisión que asumió la cartera de Comunicación. Fue en dos reuniones en las que se decidió analizar la prohibición de publicidad estatal, previa revisión de notas críticas contra la gestión de Evo Morales.

Estas versiones fueron negadas por el Ejecutivo. El vicedirector de Gestión Comunicacional, Sebastián Michel, afirmó a este medio que "desconoce" si se desarrollaron esas reuniones. En todo caso, dijo que estas decisiones no tendrían que ser adoptadas.

8 Sacha Llorenti es hoy Embajador de Bolivia ante la ONU.

9 Revelan reunión para un supuesto veto a medios, <http://enlacesbolivia.net/3370-Revelan-reunion-para-un-supuesto-veto-a-medios->

10 Revelan reunión para un supuesto veto a medios, <http://enlacesbolivia.net/3370-Revelan-reunion-para-un-supuesto-veto-a-medios->

Monitoreos

En los encuentros, que se desarrollaron el jueves 8 y lunes 12 de este mes, se habría presentado un estudio de monitoreo realizado por una unidad del Ministerio de Comunicación. Los papeles revelaban las noticias que dañan la imagen del Gobierno. En ese análisis, Página Siete y dos televisoras nacionales se vieron perjudicadas. Después de un debate pasivo, entre cerca a diez personas en una sala del Ministerio de Comunicación, hubo una única conclusión: apuntar a estos medios con la reducción de publicidad estatal -en el caso de los canales- y mantener nulo en el rotativo paceño.

Presentes

A las reuniones, que fueron desarrolladas por las mañanas, asistieron representantes de las direcciones de comunicación de los ministerios. Estas citas estaban dirigidas por autoridades de Comunicación.

Algunas oficinas de prensa ministeriales confirmaron que se desarrollaron estos dos encuentros, pero evitaron comentar sobre el contenido y las conclusiones de los eventos.

EL DEBER llamó cuatro veces a la viceministra de Políticas Comunicacionales, Claudia Espinoza, y se abstuvo de atender el requerimiento, pese a que se explicó a su secretaria el motivo de la entrevista. La autoridad no devolvió las llamadas a pesar del compromiso.

También fueron vanos los intentos de contactarse con la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, que no contestó su teléfono celular.

Sobre el tema, el director del diario paceño Página Siete, Raúl Peñaranda, ratificó que el medio que dirige no recibe publicidad oficial desde octubre de la pasada ges-

ción, cuando el vicepresidente Álvaro García vinculó al rotativo con intereses políticos de una diputada chilena.

Para saber

Baja la publicidad En una de las redes televisivas confirmaron que en este mes se redujo la publicidad estatal que otorga el Gobierno.

Millonario gasto Según un estudio de la empresa PubliMarket, el Gobierno, en 2012, destinó \$us 1.332.142 en propaganda pública en los diferentes medios del país.

Hay inquietud en la ANP por falso escenario de tensión La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) emitió ayer un comunicado en el que expresa su “profunda inquietud” por la generación de falsos escenarios de tensión en torno al trabajo de los medios de comunicación en Bolivia.

El documento, firmado por el secretario ejecutivo de la ANP, Juan León, convoca a todos los sectores a tomar conciencia sobre los valores que se ponen en riesgo. Instó que prevalezcan los valores democráticos, de convivencia, armonía y de mutuo respeto.

La ANP lamenta los ataques verbales de algunas autoridades registrados en la última semana contra el trabajo de algunos medios de comunicación. En ese escenario, demanda al Gobierno y sus autoridades el ejercicio de sus funciones específicas en apego a las leyes y solo en la perspectiva de satisfacer las esperanzas ciudadanas como medio para recuperar su confianza y credibilidad”, señala el documento.

La ANP ratifica su compromiso de defensa del acceso a la información pública como garantía de transparencia del trabajo de los funcionarios públicos y rechaza los discursos que pretendan aislar a la prensa de esa reivin-

*dicación, aduciendo que la ley no es de exclusividad de los periodistas*¹¹.

El 23 de agosto de 2013, el gobierno respondió a esta publicación de El Deber, a través de la página digital del Ministerio de Comunicación, en los siguientes términos:

*“La viceministra de Políticas Comunicacionales, Claudia Espinoza, consideró una manipulación “que no contribuye a la vigencia de la libertad de expresión, ni al periodismo ni a la democracia en el país”, la publicación incompleta de una nota dirigida al director del periódico El Deber, Pedro Rivero Mercado”, en la que aclaraba una información incoherente, inconsistente y falsa, aparecida el 14 de agosto con el título de: “Revelan reunión para un supuesto veto a medios”*¹².

La viceministra Espinoza quedó sorprendida al descubrir que la nota aclaratoria no fue publicada en su integridad y así lo señala en una segunda nota cursada a Rivero Mercado. “Lamento que El Deber no respete las aclaraciones que como autoridad y lectora fui obligada a hacer, debido al manejo incoherente, inconsistente y que falsea la verdad sobre una serie de hechos que comprometen el trabajo del Ministerio de Comunicación”, subraya.

Precisamente en la primera nota la Viceministra puntualiza que “la política comunicacional publicitaria del Gobierno responde a criterios técnicos y de democratización de la pauta, cuyas decisiones se asumen en una comisión intrainstitucional del Ministerio”. Al pedir que se aclare la especie difundida por El Deber, la autoridad advierte que “algo más de profesionalidad hubiese

11 Revelan reunión para un supuesto veto a medios, <http://enlacesbolivia.net/3370-Revelan-reunion-para-un-supuesto-veto-a-medios->

12 <http://www.comunicacion.gob.bo/?q=20130823/12394>

conducido al redactor a verificar sus conclusiones en los propios canales que dicen haber sido afectados”.

ACLARACIÓN DE EL DIARIO

La falsa información difundida por El Deber fue tomada por El Diario como fuente informativa, por lo que la Viceministra de Políticas Comunicacionales debió cursar también al Director de El Diario, Antonio Carrasco Guzmán, una carta pidiendo que “los redactores de El Diario confirmen la información que recogen de otros medios para evitar la difusión de mensajes que mienten, distorsionan, tergiversan, manipulan y falsean la verdad”. Según Claudia Espinoza, “este tipo de periodismo, que reproduce contenidos sin verificarlos daña la credibilidad del medio de comunicación (El Diario) que usted conduce y del periodismo nacional”.

Meses antes de esta polémica y luego de pedir reserva de fuente, siete asesores de comunicación de diferentes ministerios describieron cómo se decidía el castigo o premio a medios de comunicación social a través de la publicidad, en reuniones periódicas, lo que después el matutino El Deber publicó el 14 de agosto de 2013.

El 20 de diciembre de 2013, el gobierno expulsó a la Organización No Gubernamental IBIS Dinamarca, tras acusarla de “injerencia política y acciones de división en las organizaciones sociales”¹³.

Esta institución trabajaba con Erbol en proyectos dirigidos a derechos indígenas. Una de las razones de su expulsión fue precisamente su relación con este medio. Lo reconoció el mis-

¹³ Gobierno expulsa de Bolivia a la ONG IBIS por injerencia política, http://www.la-razon.com/nacional/Gobierno-Bolivia-ONG-IBIS-injerencia_0_1964803571.html

mo presidente Evo Morales el 23 de diciembre de 2013, tres días después de la expulsión de IBIS¹⁴.

En rueda de prensa y al ser consultado por la reciente decisión de expulsar del país a IBIS - Dinamarca, el Jefe del Estado acusó a algunas de estas instituciones de usar el dinero que llega del extranjero y financiar opositores para conspirar contra su gestión.

“ONG que invierta el 70, 80 por ciento bienvenido, excelente, nos ayuda a salir de la pobreza, pero si sólo están usando a la gente que necesita y están aprovechando lo demás, mal pues o está financiando a los medios de comunicación, creo que ERBOL ya me está mirando, está levantando la mano”, señaló ese día.

“Se está financiando con plata del exterior que ERBOL esté cada día sacando la mugre al gobierno, al Evo Morales, para qué se necesita esa clase de financiamientos, seamos dignos”, manifestó.

Esta expulsión atemorizó a otras ONG, cuyos directivos se inhibieron, a partir de ese hecho, de trabajar o difundir publicidad social a través de Erbol. Fue una señal muy fuerte de lo que era capaz de hacer el gobierno de Morales para controlar las corrientes de opinión pública.

2.3. Amanda dice por qué Erbol no recibe publicidad del Estado y Amalia denuncia “asfixia” económica.

El Poder Ejecutivo se refirió por primera vez al veto publicitario el 9 enero de 2014, cuando la entonces ministra de Comunicación, Amanda Dávila, declaró que el Poder Ejecutivo no pauteaba publicidad en la radio Erbol La Paz porque “no es la

¹⁴ Evo ataca otra vez a ERBOL, ERBOL le desea Feliz Navidad, http://www.erbol.com.bo/noticia/politica/23122013/evo_ataca_otra_vez_erbol_erbol_le_desea_feliz_navidad

primera en rating, no da voz al gobierno, sólo informa todo lo negativo, no dice la verdad y no es equilibrada”.

“Erbol dejó de ser referente del periodismo boliviano”, añadió la ministra, en una entrevista realizada precisamente por ese medio. Sin embargo, Erbol era y es una de las redes de radios más escuchadas, creíbles, equilibradas e independientes del país.

Ese mismo día, Dávila explicó que el gobierno pone publicidad en el 99% de medios, excepto en aquellos racistas o con intereses contrarios al país.

La ministra también manifestó que un comité (integrado por su persona, las viceministras del Ministerio de Comunicación y los directores de área de publicidad) decide en qué medios pausar publicidad gubernamental (propaganda) sobre la base de determinadas categorías.

En ese sentido, aseguró que el gobierno de Evo Morales no pautea publicidad en medios racistas o que pregonen intereses contrarios a los intereses nacionales. También señaló que difunden publicidad en las radios afiliadas de Erbol, excepto en la radio de La Paz, porque no es la primera en audiencia. “La primera en alcance en La Paz es radio Panamericana”, indicó¹⁵.

Según Dávila, su gestión utilizó cinco criterios para otorgar publicidad. «El primer criterio es la definición de públicos meta y el alcance del medio de comunicación; el segundo es la democratización de la publicidad; el tercero, el trabajo de los medios de acuerdo con los intereses nacionales; el cuarto, cumplimiento del principio de no al racismo, y el quinto, la ‘veracidad’ de la información”, explicó.

La ministra reveló que para el año 2014 el gobierno destinó 60 millones de bolivianos a la publicidad de gestión gubernamental.

15 Ministra dice que ERBOL informa sólo lo negativo, http://www.erbol.com.bo/noticia/politica/09012014/ministra_dice_que_erbol_informa_solo_lo_negativo

mental. Sin embargo, voces críticas informaron por ese entonces que en un par de días con un solo spot en contra de una candidatura, se erogaron más de siete millones de bolivianos.

Según la autoridad, el costo de transmisión por el canal estatal es uno de los más bajos del mercado porque el segundo oscila en 17 bolivianos a diferencia de otros canales que cobran por encima de los 70 bolivianos¹⁶.

Cinco meses después, el 13 de junio de 2014, el Vicepresidente Álvaro García Linera, aseguró, respaldado en las declaraciones de Amanda Dávila, que no existe veto publicitario de parte del Gobierno hacia medios de comunicación independientes.

“La ministra de Comunicación ya dio su criterio. No hay veto a nadie. Hay unos criterios técnicos y profesionales para diferenciar la presencia de la publicidad estatal en función de receptividad e influencia de los medios”, puntualizó¹⁷.

El lunes 16 de junio de 2014, el periódico Página 7 publicó un editorial sobre las declaraciones del Vicepresidente.

“Un buen número de medios de comunicación en Bolivia no recibe del Estado un solo dólar de publicidad (en esa lista está Página Siete, por ejemplo, además de medios como ERBOL o radio Fides) y las razones esgrimidas por las autoridades para ello no son ni transparentes ni legales ni éticas”¹⁸.

16 El Gobierno Central destina Bs60 millones a publicidad. https://www.eldia.com.bo/index.php?c=Portada&articulo=Destina-Bs-60-millones-a-publicidad&cat=1&pla=3&id_articulo=155167

17 García Linera afirma que no hay veto publicitario, <http://www.paginasiete.bo/nacional/2014/6/13/garcia-linera-afirma-veto-publicitario-24096.html>

18 El Vice y la publicidad estatal, <http://www.paginasiete.bo/opinion/2014/6/16/vice-publicidad-estatal-24310.html>

“La ministra de Comunicación ya dio su criterio. No hay veto a nadie. Hay unos criterios técnicos y profesionales para diferenciar la presencia de la publicidad estatal en función de receptividad e influencia de los medios.

“El periódico paceño indicó que entre los criterios esgrimidos por Dávila para que los medios reciban publicidad de las entidades gubernamentales están “la entrega de información veraz”, que afectaría a ERBOL y, suponemos, a Fides, y que “el trabajo de los medios debe estar de acuerdo con los intereses nacionales.

“Claramente esos criterios no se sustentan en la realidad. ERBOL es más creíble que muchos otros medios que reciben toneladas de publicidad del Gobierno. En el caso de Página Siete es falso, como se ha demostrado tantas veces, que “no esté acorde a los intereses nacionales”. Por el contrario, siempre ha defendido esos intereses, específicamente los referidos a la demanda marítima.

“En un caso paralelo, un diario que algunos analistas consideran relacionado al oficialismo, ha sido acusado recientemente nada menos que de entregar secretos a un tercer país, justamente en el tema marítimo, el más sensible de los asuntos de las relaciones internacionales bolivianas.

“Si el Ejecutivo cree que eso es así, entonces ese diario paceño claramente cae en la categoría señalada por la ministra, pero ello no ha impedido que se siga favoreciendo con contratos de publicidad estatal. Por lo tanto, las categorías mencionadas por Dávila son falsas o acomodaticias a los intereses del Gobierno.

“Así que no hay cómo negar que el Gobierno utiliza un sistema de “premio y castigo” a los medios de comunicación con la entrega o no de recursos estatales como

forma de publicidad. ¿A quién se castiga? A los medios que son críticos con la línea gubernamental. Es una forma de afectar la libertad de prensa.

“Claramente, no se sustentan en la realidad los criterios señalados por el Gobierno para firmar o no contratos de publicidad estatal con los medios de comunicación”¹⁹.

Dos días después de este editorial, es decir el 18 de junio, el presidente Morales declaró que no entiende eso del veto publicitario y agregó que cada quien, incluidas autoridades del Estado, “puede(n) hacer su publicidad o su propaganda” en el medio de comunicación que quiera.

“(Uno) no está obligado a hacer su propaganda en algún medio de comunicación”, indicó en respuesta a una pregunta sobre el veto publicitario de su gobierno a medios de comunicación independientes.

“Decir que hay veto (publicitario) no entiendo. Hasta usted, donde quiere hacer su publicidad, tiene derecho a hacer su publicidad, eso no es veto. Sólo quiero decirles que aquí no hay medios independientes (...) No quisiera traer mi archivo de como en base a la mentira atacan a Evo”, manifestó.

“Cualquier (gobierno) puede decir a quién y dónde puede hacer su publicidad, es un derecho de cada uno, no está obligado a hacer su propaganda en algún medio de comunicación y eso he aprendido durante la campaña”, opinó en rueda de prensa.

Ese día, Morales insistió que no hay medios independientes. “No se puede ser tan ingenuos al creer que existen medios independientes. Decir que hay medio independientes (es)

¹⁹ El Vice y la publicidad estatal, <http://www.paginasiete.bo/opinion/2014/6/16/vice-publicidad-estatal-24310.html>

equivocarse. Cada medio tiene su propia alineación”, señaló y recordó a los periodistas informar la verdad²⁰.

El 2 de agosto de 2015, la periodista Amalia Pando, que conducía la revista de la mañana de Radio Erbol-La Paz, denunció asfixia económica y presiones gubernamentales contra ese medio de comunicación, lo que causaron su alejamiento del programa.

En entrevista con la periodista Mónica Salvatierra de El Deber, Pando declaró que renunció porque “quiero facilitar la posibilidad de que Erbol no se hunda económicamente”.

“Siento que estamos con el agua en el cuello y un poco más arriba. Quiero alivianar la carga de este barco. Sé que el gobierno ha pedido mi cabeza reiteradamente y entonces se la entrego. A ver si así se salva Erbol, que yo creo que es un instrumento de comunicación indispensable en este periodo y en cualquier otro”, dijo.

Aseguró que ERBOL se está “ahogando financieramente porque el gobierno confunde la publicidad con la compra de conciencias” y añadió que comete “un haraquiri para ver si salvo el proyecto”.

Consultada sobre si en Erbol le sugirieron que renuncie, dijo que “de ningún modo” y agregó que “no se está inmolando” ni que es una víctima. “Es la factura que uno paga”, agregó. “Y una sabe que se tiene que pagar una factura cuando se toma una posición política. Y yo la tomé”.

Pando subrayó que hace “un periodismo militante y soy solidaria con Potosí, soy solidaria con el TIPNIS y ese ha sido mi pecado y el de Erbol porque había una línea editorial conjunta,

20 Evo dice que no tiene entiendo el veto publicitario a medios independientes. http://www.erbol.com.bo/noticia/politica/18062014/evo_dice_que_no_entiende_el_veto_publicitario_medios

que no sé si con mi salida cambie. El TIPNIS marcó un antes y un después. Esta es la factura. Me estoy retirando en un gesto desesperado, a ver si con esto el gobierno tiene una actitud algo más democrática con Erbol”.

Reveló que otras fuentes de financiamiento se han ido cerrando para Erbol en los últimos años. Por ejemplo -contó- que la ONG IBIS Dinamarca apoyaba a Erbol publicitariamente, pero que ello concluyó cuando esa entidad fue expulsada del país. También dijo que el “banco que me da cinco premios en el año como mejor conductora” (banco BISA), “cuando voy a buscar publicidad, no me la dan porque todos sabemos que si me la dan, inmediatamente el gobierno los llama”.

La laureada periodista indicó que “el Gobierno no ha mandado a clausurar Erbol con militares, pero lo está haciendo por la vía de la asfixia económica; eso no es acoso, esto es una asfixia económica para matar a un medio de comunicación”. Agregó que “un medio no puede solito con un Estado. Si retirándome ayudo en algo, pues me retiro, porque no se trata de un tema individual, sino de una institución muy importante para el país”²¹.

Amalia Pando apoyó frontalmente, desde los micrófonos de Erbol, el llamado Proceso de Cambio y los primeros años de gestión de Morales.

Cuando comenzó a ser crítica respecto a hechos como la represión gubernamental contra los indígenas marchistas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécore (TIPNIS) en Chaparina el 25 septiembre de 2011, el gobierno del MAS usó abiertamente el veto publicitario para sancionar a este medio, y recurrió a su poder atemorizante para evitar que la empresa privada difunda avisos en esta radioemisora.

21 El Gobierno pidió mi cabeza, entonces la entrego, <http://www.eldeber.com.bo/suplementos/gobierno-pidio-mi-cabeza-entrego.html>

Además, amedrentó a organizaciones no gubernamentales que financiaban proyectos comunicacionales educativos en esta radioemisora.

2.4. García: “A algunos medios no vamos a dar recursos porque son para partidos políticos y encima mienten”.

El 11 de agosto de 2015, es decir, días después de la denuncia de la periodista Amalia Pando, el vicepresidente Álvaro García Linera acusó a cuatro organizaciones no gubernamentales (ONG) de mentir y hacer política partidaria. Del mismo modo, dijo que el Gobierno no dará publicidad a los medios de comunicación que hagan actividad del mismo tipo y deslindó responsabilidades en la salida de periodistas y conductores de algunos programas de televisión y de radio.

“Y lo decimos abiertamente, hay medios que mienten, hay medios que no informan, sino que hacen política partidaria, entonces ¿para qué darle a Doria Medina si ya le sobra la plata? ¿No le parece algo ilógico dar plata a Doria Medina? Hay medios que hacen política, que son partidos políticos, o cuasi, o parapartidos y, por supuesto, que a algunos medios no vamos a dar recursos porque son parapartidos políticos y encima mienten”, dijo García en rueda de prensa.

Destacó que el Estado boliviano contrata publicidad en más de 400 medios de comunicación, pero advirtió que el Gobierno sabrá observar “cuando haya una mentira, falsedad o personas que simplemente hacen campaña política”.

“¿Cuál es la posición del Gobierno respecto a las afirmaciones en sentido de que hay asfixia económica a medios de comunicación independientes, para silenciarlos?”, preguntó un periodista. El Vicepresidente respondió que el Gobierno “jamás usó

métodos de coerción o de presión”; sin embargo, admitió que el Ejecutivo evita la publicidad en algunos medios²².

“Pero dirán: ‘¿qué pasa con este tema de la publicidad? (...) Hemos pluralizado y democratizado la publicidad y propaganda”, aseguró García Linera, e insistió en que la publicidad gubernamental no se concentró en uno, dos o tres medios de comunicación.

Luego, dijo: “Nos van a decir: ‘oiga Presidente, ¿por qué no se da a este medio publicidad?’. Lo decimos abiertamente que hay medios que mienten, hay medios que no informan, sino que hacen política partidaria y por eso como Gobierno no vamos a dar recursos porque son para partidos, políticos y encima mienten y siempre lo hemos confrontado”, dijo.

García Linera también admitió que él y el presidente Evo Morales “se han visto beneficiados por la libertad de expresión”, por lo que -dijo- respetan incluso a los que “nos dicen de todo y los que nos ofenden o mienten... respetamos”.

Agregó que a diferencia de años anteriores, “nunca hubo tanta libertad de expresión como hoy en día. Pueden decir lo que se les antoje de sus gobernantes, y los gobernantes simplemente responden con la verdad, no con el insulto, chantaje o amenaza”.

En torno a las ONG, el Vicepresidente señaló que responden a intereses de empresas multinacionales.

“Detrás de una ONG están las grandes empresas extranjeras de automóviles, de petróleo, de gas, de biotecnología que financian a estas ONG y están gobiernos del norte (América) que financian estas ONG. Financien en su país, no tienen por

²² Los medios que mienten no reciben la publicidad estatal, <http://www.paginasiete.bo/nacional/2015/8/11/vice-medios-mienten-reciben-publicidad-estatal-66196.html>

qué venir a entrometerse a nuestro país, nuestra relación con los gobiernos extranjeros y empresas extranjeras es muy clara, servicios en función de nuestra política, utilidad en función de la política de Estado, pero no este tipo de acción política encubierta”, manifestó.

Tras atacar a las ONG, García acusó otra vez a algunos medios de comunicación de emitir información falsa y manipulada; y deslindó responsabilidad en la salida o despido de conductores o periodistas en esos medios. Dijo que desde un principio ellos identificaron a los medios que difundían información tergiversada de los hechos²³.

En respuesta al segundo mandatario, el director ejecutivo del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Marco Gandarilla, denunció que las declaraciones del vicepresidente representan un atentado contra los derechos civiles reconocidos por la Constitución y tratados internacionales de derechos humanos.

“Denunciamos, además, que la amenaza de expulsión del país a quienes ejerzan sus derechos, sobrepasan las atribuciones de su investidura y no se encuentran contempladas en el ordenamiento jurídico de ningún Estado democrático”, manifestó esa institución en un comunicado público.

El director del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Javier Gómez, afirmó que el Gobierno tiene todo el derecho de promover las políticas públicas que implementa en el país y que esta institución tiene el derecho de revelar los resultados de esas políticas públicas.

“Es una acción antidemocrática que viola los derechos, estamos protegidos, somos una entidad privada, tenemos libertad

23 Vice tilda a algunos medios y a ONG de “hacer política”, <http://www.eldeber.com.bo/bolivia/vice-tilda-medios-y-ong.html>

de asociación, tenemos derecho a la libre expresión; no hemos violado ninguna ley. Para el Gobierno y todos los gobiernos, se quiere matar al mensajero cuando no se puede tapar la realidad”, puntualizó.

Pocos días después, el periódico Página 12 de Argentina publicó el 17 de agosto de 2015 una entrevista al Presidente Morales en la que señaló que “en Bolivia hay libertad de expresión, falsamente dicen que no hay”.

Cuando la periodista le consultó sobre la falta de publicidad oficial en algunos medios, el mandatario manifestó que “el Gobierno decide por qué medio puede llegar al pueblo. No es una obligación llegar a todos y lo peor es que algunos medios mienten e insultan. La gente va a creer al medio que dice la verdad bajo la libertad de expresión”.

2.5. “Discriminación positiva”: ATB, PAT y BTV con el 55% de publicidad del Estado.

El viernes 28 de agosto de 2015, la Ministra de Comunicación, Marianela Paco, fue interpelada por los diputados de la Oposición, Norma Piérola y Wilson Santa María, en la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre el manejo de la publicidad estatal, su distribución y la “asfixia económica” a la que son sometidos algunos medios de comunicación.

Los parlamentarios opositores solicitaron informes sobre la contratación de servicios publicitarios, los requisitos y parámetros que exige esa cartera de Estado para la adjudicación y contratación.

Paco respondió que su cartera realiza “discriminación positiva” para seleccionar dónde y cómo se hace la difusión de la gestión del presidente Evo Morales, pero que en ningún caso se trata de buscar asfixiar a ningún medio, como señala la oposición.

“A quienes conocen de leyes, conocen de derecho, deberían tener claro que hay discriminación positiva, y la discriminación positiva es en apego a los mandatos constitucionales, a los mandatos que están en la ley”, insistió²⁴.

La ministra actual también aseguró que lo que se hace desde el Ministerio de Comunicación es “difundir información de gestión gubernamental”.

Aquella ocasión indicó que el gobierno nacional “no persigue ni prohíbe la información de los medios de comunicación; nuestro Ministerio no discrimina a nadie, cumplimos con los mandatos de la CPE”, y agregó que en Bolivia la libertad de expresión está plenamente garantizada”.

Marianela Paco negó la existencia de “asfixia económica” contra los medios de comunicación, dijo que si hubiera aquello no existirían más solicitudes de licencias de funcionamiento de radioemisoras y televisoras, a nivel nacional. Añadió que durante el mandato del presidente Morales “se democratizó la comunicación”.

Respecto al presupuesto destinado a la publicidad, la autoridad informó que su despacho erogó durante el 2014 más de 248 millones de bolivianos para publicidad estatal y que en 2015 se presupuestó más de 325 millones de bolivianos.

En esa misma sesión, Paco informó que el gobierno desembolsó hasta julio de 2014 unos 25,4 millones de bolivianos en compra de espacios en distintos medios de comunicación y otros 5,9 millones en pago a canal 7 Bolivia TV. En tanto, la impresión de folletos, trípticos, separatas y revistas requirió de 325,7 millones de bolivianos²⁵.

24 Hay “discriminación positiva” de medios, dice ministra Paco, <http://www.eldeber.com.bo/bolivia/hay-discriminacion-positiva-medios-dice.html>

25 El gobierno gasta más en panfletos que en medios, <http://www.eldeber.com.bo/bolivia/gobierno-gasta-mas-panfletos-medios.html>

“Nos preguntan cuánto de recursos ha erogado para impresión de folletos, revistas, separatas, trípticos que difunden temas gubernamentales: en 2014 para ese tema se destinaron 248.990.591 bolivianos; luego de enero a julio de 2015 el presupuesto para eso es de 325.796.386 bolivianos”, dijo.

Sin embargo, esta cifra no guarda relación con el presupuesto institucional del Ministerio, porque, según Marianela Paco, el presupuesto 2014 para esa cartera de Estado era de 649.693.297 bolivianos y para esta gestión el monto es de 284.938.357, inferior al presupuesto para panfletería²⁶.

Al final del acto, la autoridad evitó dar explicaciones sobre este punto y dijo que la interpelación dejó en claro que fue una convocatoria política de la bancada opositora que busca confundir con el tema de la asignación de publicidad en los medios de comunicación²⁷.

En aquella ocasión, los medios estatales que transmitían la interpelación de Paco interrumpieron la emisión en el momento en que la diputada de la oposición, Norma Piérola, hacía uso de la palabra para interpelar algunas de las declaraciones de la ministra²⁸.

La interpelación de la oposición concluyó con un voto de confianza de la mayoría masista en la Asamblea Legislativa Plurinacional a la ministra de Comunicación, Marianela Paco.

26 El gobierno gasta más en panfletos que en medios, <http://www.eldeber.com.bo/bolivia/gobierno-gasta-mas-panfletos-medios.html>

27 El gobierno gasta más en panfletos que en medios, <http://www.eldeber.com.bo/bolivia/gobierno-gasta-mas-panfletos-medios.html>

28 Ministra Paco evade algunas preguntas y ataca a oposición, http://www.eldiario.net/noticias/2015/2015_08/nt150829/politica.php?n=65&-ministra-paco-evade-algunas-preguntas-y-ataca-a-oposicion

Días antes de la interpelación, la opositora Unidad Demócrata (UD) reveló un estudio en el que tres redes de televisión, ATB, PAT y BTV, tienen el 55% de toda la publicidad estatal, lo que representa 60 millones de dólares, pese a que estos medios concentran solo el 10% de audiencia, según un estudio de medición.

Los dos primeros canales (ATB y PAT) han sido considerados como “paraestatales” por algunos estudios de medios, en referencia a que estarían bajo dominio del Gobierno central. El tercero es estatal²⁹.

Para respaldar la información, Santamaría presentó un estudio de audiencia realizado por la empresa ANDA en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y El Alto. Los datos sobre publicidad fueron tomados del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) y de Impuestos Nacionales.

Según el diputado opositor, las tres redes nacionales “no figuran en la lista de alta preferencia ciudadana”, por lo que preguntó «¿bajo qué criterios se elige el medio de comunicación y a cuánto asciende el presupuesto de publicidad? ¿Por qué existen las diferencias de asignación de medio a medio? ¿Por qué los medios con mayor rating no tienen la mayor publicidad?».

El estudio de ANDA establece que las redes de mayor audiencia son: Unitel, Red UNO y Bolivisión, sin embargo tienen baja publicidad oficial.

Por esos mismos días, el exviceministro de Comunicación, Sebastián Michel, dijo en el programa ‘Esta Casa no es Hotel’, de ATB, que uno de los criterios para difundir publicidad estatal es su nivel de audiencia.

29 Tres medios reciben el 55% de publicidad estatal, <http://www.eldeber.com.bo/bolivia/tres-medios-reciben-55-publicidad.html>

El diputado Santamaría informó en esa misma ocasión que durante la gestión 2014, los ministerios, empresas estatales y otras reparticiones del Estado asignaron más de 106 millones de dólares al ítem de publicidad y que, entre enero y julio de 2015, se gastaron más de 40 millones de dólares.

“La cifra agrede la sensibilidad de los bolivianos. Es demasiado dinero que se destina a publicidad”, sostuvo el asambleísta.

De los 106,5 millones de dólares, los ministerios, en su conjunto, son responsables del 67% de la publicidad, luego está Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y en tercer lugar aparece Entel³⁰.

El 8 de octubre de 2015, el periodista John Arandia declaró que fue despedido a causa de la asfixia económica contra la Red televisiva Cadena A, donde trabajó cinco años como Jefe de Prensa y presentador del noticiero central y de la revista nocturna “Todo A Pulmón”.

Arandia hizo esta revelación, semanas después de haber dejado en silencio su fuente laboral, en un evento denominado “Respirando Periodismo”, realizado el miércoles 7 de octubre de 2015 en La Paz.

“Yo no tengo ningún recelo contra mi exmedio de comunicación, porque entiendo al que fuera mi gerente, entiendo que mi profesión de periodista hoy no es compatible con los números de un canal de televisión, podía ser un raiting, pero no económicamente porque hoy hay una lucha que está delimitada por el poder con asfixia económica. Espero que lo entiendan”, dijo.

Comentó también que su verdad está vinculada a las versiones que se comentaron en diferentes espacios como en las redes sociales, desde donde se atribuyó al gobierno su salida, pro-

30 Tres medios reciben el 55% de publicidad estatal, <http://www.eldeber.com.bo/bolivia/tres-medios-reciben-55-publicidad.html>

ducto de una posible asfixia económica. “Ustedes saben cuáles son esas versiones, sí, son ciertas”, dijo³¹.

Su salida fue coincidente con la renuncia de la periodista Amalia Pando a Erbol. El gobierno negó todas las acusaciones y señaló que eran asuntos internos de los medios de comunicación.

El 27 de julio de 2016, la ministra de Comunicación, Marianela Paco, no informó a la Comisión de Planificación de Diputados sobre la cantidad de dinero que se destina a la publicidad gubernamental, pero pidió más recursos económicos para la difusión de información sobre la gestión del Gobierno³².

“La comisión que me ayude a tener mayor presupuesto para difundir la información porque son más de 8.000 millones de la inversión pública, considerando las empresas nacionalizadas. Lo cierto es que nosotros no llegamos al 1% (de la inversión pública) para difundir esa información gubernamental”, afirmó Paco, que brindó un informe oral a solicitud de legisladores de Unidad Demócrata (UD).

Los diputados de oposición Gonzalo Barrientos y Luis Alberto Vaca denunciaron que el Ministerio de Comunicación destina 122 millones de bolivianos sólo a publicidad, cuando esos recursos podrían ser destinados a otras áreas como salud, educación o seguridad social.

La ministra Paco, quien respondió a 15 preguntas, dijo sentirse preocupada porque algunos asambleístas “quieren coartar” el derecho a la información y comunicación que tiene la población.

31 John Arandia confirma que salió de la TV por asfixia económica contra el medio y presión del poder para su despido, <http://eju.tv/2015/10/john-arandia-confirma-que-salio-de-la-tv-por-asfixia-economica-contra-el-medio-y-presion-del-poder-para-su-despido/>

32 Paco no da cifras, pero pide más dinero para difusión de gestión, <http://www.paginasiete.bo/nacional/2016/7/27/paco-cifras-pero-pi-de-dinero-para-difusion-gestion-104191.html>

“Creo que ellos (asambleístas) necesitan mayor información para que no sean objeto de manipulación, engaños o de mentiras, ése es nuestro propósito y en función a la Constitución trabajamos nuestra política del Estado”, indicó.

De acuerdo con informaciones de prensa, la sesión se tornó a momentos tensa debido a que los opositores exigieron a la Ministra que dé cifras y los legisladores del MAS negaron ese pedido. El diputado Barrientos consultó a la ministra Paco: “¿por qué incrementó su presupuesto de 32 millones y a los dos meses reformuló a 90 millones de bolivianos?”.

La funcionaria explicó que no sólo destina recursos para informar sobre las obras o proyectos que entrega el Gobierno, sino también para difundir información según la necesidad coyuntural, como por ejemplo un desastre. “Aparte de la planificación, nosotros tenemos que ver otros elementos que pueden ocurrir circunstancialmente a la que debemos atender como Ministerio de Comunicación”, explicó.

Dijo que a la difusión destina menos del 1% de los 8.000 millones de la inversión pública (la inversión pública para 2016 es de 8.200 millones de dólares).

La pregunta 11 fue: “¿A cuánto ascendieron los costos de transmisión de los partidos de fútbol en los que participó el presidente Evo Morales y cuál es el beneficio?”. La Ministra respondió: “Nuestro Presidente se ha convertido en un referente en el nivel deportivo como el principal impulsor, promotor del deporte en el contexto internacional y ustedes tendrían que escuchar a las mamás, a los jóvenes, papás, que (Morales) es un referente y los chicos quieren jugar así”.

Luego de responder a 15 interrogantes, la Ministra reiteró su pedido de que la ayuden a conseguir más recursos para la difusión de la gestión gubernamental.

Los legisladores del MAS, que son mayoría en la comisión, despidieron a la Ministra en medio de aplausos, pese a que no dio montos sobre los recursos gastados³³.

El diputado Vaca lamentó que Paco haya evadido dar cifras de los recursos para la difusión de propaganda gubernamental y “encima justifique que gracias a la transmisión de los partidos de fútbol del Presidente estemos yendo a las Olimpiadas”.

Su colega Barrientos reprochó la posición de la Ministra. “Nos ha dicho que requiere de más plata, más millones y millones ¿para qué? Para transmitir más partidos de fútbol del Presidente, que según la Ministra dice que es un ejemplo para la ciudadanía. Esos dineros pueden ser para salud, educación”, reclamó³⁴.

2.6. La ANP denuncia que la “asfixia económica” se profundizó.

Cuando casi todos pensaban que el uso del dinero público, usado por el gobierno para presionar a medios de comunicación, sólo había afectado a algunos canales, radios y periódicos, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) denunció el 21 de agosto de 2016 que la “asfixia publicitaria a medios” continúa y se profundizó.

La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), mediante un comunicado a la opinión pública y a las organizaciones internacionales defensoras de las libertades ciudadanas y los derechos humanos, denunció que el Gobierno dispuso la sus-

33 Paco no da cifras, pero pide más dinero para difusión de gestión, <http://www.paginasiete.bo/nacional/2016/7/27/paco-cifras-pero-pi-de-dinero-para-difusion-gestion-104191.html>

34 Paco no da cifras, pero pide más dinero para difusión de gestión, <http://www.paginasiete.bo/nacional/2016/7/27/paco-cifras-pero-pi-de-dinero-para-difusion-gestion-104191.html>

pensión de la publicidad estatal a los diarios con independencia editorial, y con ello consuma un nuevo atropello a la libertad de expresión y pone en riesgo la fuente laboral de cientos de periodistas, personal administrativo y de talleres de imprenta³⁵.

El documento señala: *“Lamentamos que una extendida campaña dirigida a desprestigiar el trabajo responsable de nuestros medios asociados se transforme en una agresión económica a manera de castigo contra el ejercicio de un periodismo alentado por la búsqueda de la verdad.*

(...) Los hechos de corrupción, tráfico de influencias y acusaciones que involucran a altos funcionarios cobraron interés informativo porque son actos que comprometen el uso de dinero y bienes públicos, y, por tanto, la ciudadanía tiene el derecho constitucional de ser informada. Por esa consideración, las denuncias no pueden ser atribuidas a una acción planificada por los medios que cumplen su función informativa.

La exclusión de los medios independientes de recibir los anuncios publicitarios estatales vulneran el artículo 13 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en octubre de 2000”.

En respuesta a la ANP, la ministra de Comunicación, Marianela Paco, negó otra vez el martes 23 de agosto del presente año que el Gobierno aplique una “asfixia” económica a algunos medios de comunicación, mediante el manejo de los recursos públicos por concepto de publicidad y criticó el manejo informativo en determinados casos.

“No pueden acusarnos de asfixia económica, no pueden decirnos que no hay libertad de expresión en el país, cuando hace

35 ANP denuncia asfixia publicitaria a medios, <http://www.eldeber.com.bo/santacruz/anp-denuncia-asfixia-publicitaria-medios.html>

dos semanas se decidió modificar la ley y garantizar las licencias de transmisión hasta el 2019 y además con una renovación automática, por tanto, estamos garantizando la libertad de expresión, no solo de los dueños sino de los usuarios”, aseveró la autoridad en conferencia de prensa³⁶.

La ministra mostró, para sustentar sus argumentos, las portadas de algunos medios impresos, noticias relacionadas a las personas con discapacidad y la protesta de cooperativistas, artículos de opinión, editoriales e incluso información del año 2011.

“Hay una actitud de asumir profecía, para lo que es instigar a que haya conflicto y del otro lado, hay una invisibilización de la gestión de Gobierno, esas notas no se reflejan en los medios de comunicación”, señaló en relación a versiones de dirigentes mineros difundidas por los medios que señalaban que los bloqueos comenzarían ayer.

Paco explicó que “la veracidad que está deformada. En vez de aproximarse a la verdad de los hechos, dan los sucesos como si fueran verdad, no se verifica, no hay equilibrio, no hay pluralidad y en varios casos han tenido que disculparse”.

Agregó que “esperemos que esos medios diversifiquen sus fuentes. Teníamos la posibilidad de cerrar a los medios que mienten y no difunden la entrega de obras para el pueblo boliviano, pero no le hemos puesto precio y esta adecuación que durará hasta 2019, tiene el fin de garantizar la libertad de expresión”, sobre la renovación de licencias.

Las ministra afirmó que “denuncian asfixia y al mismo tiempo quieren ser independientes, (...) Si son independientes, no deberían sujetarse a una dependencia económica”.

36 Niegan asfixia y critican los contenidos de medios, <http://www.eldeber.com.bo/bolivia/niegan-asfixia-y-critican-contenidos.html>

2.7. El veto publicitario se reproduce en Tarija.

El veto publicitario fue reproducido con matices y particularidades por algunos gobiernos departamentales y municipales. En ciertas regiones, periodistas y gobernantes terminaron negociando, en otras hubo una aceptación silenciosa, y en algunas quedaron aisladas las voces críticas o se autocensuraron o inhibieron para sobrevivir.

El caso más emblemático estalló en Tarija en septiembre de 2013 a partir de un audio difundido por periodistas de esa región.

El periódico digital Erbol publicó el 29 de septiembre de 2013 una noticia titulada: “Tarija: hacen contratos de publicidad con una cláusula para evitar denuncias”³⁷.

“En la Gobernación de Tarija se hacen contratos de publicidad con una cláusula que frena la difusión de denuncias de corrupción y obliga a promocionar las actividades de esa institución, según un audio con la voz del director de Comunicación, Marco Batallanos”, señala el artículo.

En el documento sonoro, al que tuvo acceso la prensa local, el funcionario público revela cómo condiciona la firma de la pauta con propietarios de periódicos, radios y canales de televisión y recomienda a todas las oficinas estatales a utilizar el mismo mecanismo.

En el audio, el Director de Comunicación de la Gobernación de Tarija explica los pasos que sigue para que los medios de comunicación acepten las cláusulas del documento a firmarse.

37 Tarija: hacen contratos de publicidad con una cláusula para evitar denuncias, <http://www.erbol.com.bo/noticia/regional/29082013/tarija-hacen-contratos-de-publicidad-con-una-clausula-para-evitar-denuncias>

“Nosotros en los contratos de publicidad que hacemos con los canales, las radios y periódicos, etc, etc, estamos poniendo una partecita donde dice “el medio de comunicación se compromete en no calumniar, divulgar y sacar denuncias sin prueba alguna de cualquier autoridad de la Gobernación”, señala.

En la charla grabada, Batallanos también clasifica a los medios que sí cumplen con lo pactado (difusión de contenidos de la Gobernación, entrevistas, spots y otros), entre ellos la Red Unitel, liderada por el periodista Danilo Olmos. Al mismo tiempo, censura la negligencia e incumplimiento de muchos otros.

“Yo tengo como unas diez notas a Danilo Olmos que no me pasa los spot porque su switcher se ha olvidado o su secretaria se ha olvidado de renovar el spot, etc, etc. Ahí está el encargado de difusión que ya con Danilo Olmos ha tenido demasiados problemas y el mismo ha reconocido. Él dijo, sí, mi switcher se ha olvidado me dice”.

Transcripción textual de la confesión del (ex) Director de Comunicación de la Gobernación de Tarija.

“Hay algunas cláusulas que (nosotros en la Gobernación) les estamos implementando, por ejemplo, yo no he visto banner de la Gobernación en los programas independientes ni en los canales de televisión, ¿porque no los ponen?, deberían ponerlos los banners. El director de GNV los hizo poner, si es que quieren poner con la dirección o con cualquier gerencia³⁸.

Otra cosa que me parece importante, nosotros en los contratos de publicidad que hacemos con los canales, las radios y periódicos, etc, etc, estamos poniendo una

38 Tarija: hacen contratos de publicidad con una cláusula para evitar denuncias, <http://www.erbol.com.bo/noticia/regional/29082013/tarija-hacen-contratos-de-publicidad-con-una-clausula-para-evitar-denuncias>

partecita donde dice "el medio de comunicación se compromete en no calumniar, divulgar y sacar denuncias sin prueba alguna de cualquier autoridad de la Gobernación".

Ese es el argumento para suspender el contrato, si es que alguien dice don Marco Batallanos no quiere dar información de la Gobernación, mentira pues.

Don Roberto Gutiérrez y don Raúl, gerente y director de prensa de Plus TV, me han pedido una petición de informe escrito, se los he entregado.

Ahora que el otro periodista haga su showcito y mienta a la gente... yo tengo...señores (les digo) saben que yo no voy a trabajar con ustedes y (les) rescindo el contrato, porque ustedes no han cumplido. (Ustedes) han sacado una denuncia sin prueba alguna, incluso yo los puedo probar lo contrario.

Esa es una cláusula (del contrato) que he tenido algunos problemas con los dueños, especialmente con algunos dueños que son abogados que dicen pero no. (Yo les digo) cómo vos puedes decir en el contrato, cómo puede poner que no calumniemos a una autoridad. Entonces no es pues un periodista serio, no es un canal serio, no es así, (si no) va a sacar cualquier cosa. (A raíz de esto) algunos se han molestado, pero finalmente han aceptado.

Y puede ser ese alguno de los temas los cuales a algunos periodistas se les ponga un alto, porque, algunos de los colegas sacan cualquier cosa, Muere un perro en la plaza, la Gobernación le ha pisado el perrito, o sea cualquier cosa sacan.

Ese es un artículo que hemos puesto ahí en el contrato de la Dirección de Comunicación.

Reitero, dos dueños de medios de los más fuertes de Tarija que son abogados, han dicho pero cómo, no voy a firmar.

(Le dije) no lo firme no hay ningún problema. Al día siguiente viene y (dice) lo voy a firmar.

Pero aquí cómo van a saber si, si lo que yo he denunciado es, me vas a cortar el contrato. Con esto, lo tendrá que aceptar. Así nomás es.

Yo les sugiero que hagan lo mismo colegas, compañeros para un poco controlar a los medios, porque a los medios no se los puede controlar. Es muy difícil, pero sí por lo menos tener cierta injerencia ahí en el tema comunicacional, para que ahí ellos también con ese nos den espacio, no solamente publicitario.

La publicidad, el spot, los banners y las entrevistas y las conferencias de prensa también los tienen que cubrir, porque cada medio tiene su reportero.

Entonces en los contratos tenemos que agarrar bien a los dueños y a los independientes para que cumplan.

Si yo ahorita hago un monitoreo de cualquier dirección o secretaría, yo les apuesto que no me cumplen, ningún canal cumple. A excepción de algunos que son serios por ejemplo ¿no? Unitel que cumple pero así se le va a veces.

Yo tengo como unas diez notas a Danilo Olmos que no me pasa los spot porque su switcher se ha olvidado o su secretaria se ha olvidado de renovar el spot, etc, etc. Ahí está el encargado de difusión que ya con Danilo Olmos ha tenido demasiados problemas y él mismo ha reconocido. Él dijo: sí, mi switcher se ha olvidado me dice.

(Yo le digo) con eso te puedo rescindir el contrato le digo.

Entonces el tema de los contratos compañeros, yo les voy a pedir que tengamos mucho cuidado.

Si necesitan alguna ayuda o información sobre el contrato que estamos haciendo nosotros les podemos dar una copia, para que ustedes lo puedan poner también.

Me parece que sería lo ideal que todos tengamos un modelo tipo de contratos de publicidad”.

Esta estrategia de uso de dinero público para presionar y controlar a los medios de comunicación tarijeños fue defendida por autoridades de la Gobernación presidida entonces por Lino Condori (MAS).

El secretario de Coordinación de la Gobernación, Darío Gareca, a quien se le atribuye el nombramiento de Marco Batallanos en ese cargo, defendió ese mismo 29 de agosto el plan de medios elaborado por éste y que fue acusado de “extorsivo”, según informó el periódico El País³⁹.

Gareca dijo que las cláusulas que se ufanó Batallanos de insertar en los contratos publicitarios con medios locales no tienen mala intención por parte del Ejecutivo.

Según Gareca, lo que buscan es evitar denuncias infundadas que no tengan las pruebas suficientes para publicar una noticia. Empero, fue más allá y, apartándose de disposiciones establecidas en la Ley de Imprenta, se refirió también al “anónimo”, afirmando que no se puede denunciar bajo secreto sin nombre.

El funcionario expresó su esperanza de que “ojalá” los medios de comunicación no agranden sus palabras, ya que muchos periodistas están en espera de lo que dirá la Gobernación.

³⁹ Darío Gareca defiende plan comunicacional extorsivo y APLP propone Ley que regule publicidad, <http://elpaionline.com/index.php/edicion-virtual/item/99824-dario-gareca-defiende-plan-comunicacional-extorsivo-y-aplp-propone-ley-que-regule-publicidad>

En tanto, el gobernador interino, Lino Condori, dijo que no conocía el plan de Batallanos, defendido por Gareca, y que la Gobernación, según él, no discrimina a ningún medio de comunicación. Los audios que revelaron el plan extorsivo de Batallanos desmintieron al gobernador, dado que expone una lista de medios “aliados” beneficiados con publicidad, así como la virtual proscripción de la única red departamental de televisión, Plus TV, así como del periódico Nuevo Sur⁴⁰.

Esa política de la gobernación tarijeña fue rechazada por la Federación Departamental de Trabajadores de Prensa de Tarija. En un manifiesto, exigió a Condori actuar apegado a las normas legales vigentes “sin chantajes, ni presiones, ni shows mediáticos, ni apego a posiciones políticas partidistas, acciones que ponen en riesgo las fuentes laborales de las trabajadoras y los trabajadores”.

Tras declararse “en estado de vigilia y lucha permanente contra el uso y abuso de poder de quienes, coyunturalmente, se encuentran en instituciones públicas”, convocó a una marcha a nivel nacional para el miércoles 4 de septiembre de ese año.

De acuerdo con una información difundida por aquellos días por el diario tarijeño El País, había “un plan extorsivo más extenso, que contiene otras etapas adicionales, como la difamación y luego la compra compulsiva de medios de Tarija con miras a controlar la tendencia de opinión para las elecciones generales de 2014 y las departamentales y municipales de inicios de 2015”⁴¹.

40 Darío Gareca defiende plan comunicacional extorsivo y APLP propone Ley que regule publicidad, <http://elpaionline.com/index.php/edicion-virtual/item/99824-dario-gareca-defiende-plan-comunicacional-extorsivo-y-aplp-propone-ley-que-regule-publicidad>

41 Trabajadores de prensa tarijeña rechazan plan comunicacional extorsivo de Lino Condori, <http://www.elpaionline.com/index.php/2013-01-15-14-16-26/centrales/item/100098-trabajadores-de-prensa-tarijena-rechazan-plan-comunicacional-extorsivo-de-lino-condori>

“Los ejecutores de este plan tendrían incluso el mandato de utilizar el acoso judicial y tributario, dijeron las fuentes que revelaron el contrato de un asesor cubano y el plan pergeñado”, señaló ese medio.

“Este plan habría sido elaborado con asesoramiento de al menos un ciudadano cubano, que admitió trabajar en la Gobernación desde junio pasado, luego de estallar el escándalo de la Condorvía, un proyecto vial cuyo costo se calculó en 28 millones de dólares en 2011, pasando a costar casi 48 millones de dólares un año después”, agregó.

La secretaria ejecutiva de la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Tarija, Gabriela Ontiveros, informó que esta práctica antidemocrática del gobierno departamental también se aplicó en Yacuiba, Villa Montes y Bermejo.

“Quieren tenernos de relacionadores públicos, no quieren que salgan a la luz hechos de corrupción, quieren llevarnos a los estratos judiciales no respetando la Ley de Imprenta, el derecho a la reserva de la fuente”, mencionó.

La dirigente sindical también planteó “procesar a las autoridades que ocultan la información, a tiempo de cuestionar el temor del Gobierno de transparentar la gestión, tomando a los periodistas como opositores cuando lo que hacen es simplemente informar. Ontiveros llamó a la población a seguir de cerca estos acontecimientos que revelan una faceta desconocida de la Gobernación”⁴².

¿Quién es Gareca o Batallanos para decidir qué denuncias son infundadas o con pruebas insuficientes para publicarla o no?, cuestionaron otros periodistas.

42 Trabajadores de prensa tarijeña rechazan plan comunicacional extorsivo de Lino Condori, <http://www.elpaionline.com/index.php/2013-01-15-14-16-26/centrales/item/100098-trabajadores-de-prensa-tarijena-rechazan-plan-comunicacional-extorsivo-de-lino-condori>

Justo por aquellos días, habían estallado varios casos de corrupción en Tarija, denunciados por personas y funcionarios que pidieron reserva de fuente para evitar represalias. Los periodistas, amparados en la Constitución y el artículo 8 de la Ley de Imprenta, difundieron estas revelaciones.

Uno de esos casos se dio en los procesos de contratación de la "Condorvía" y "Condortúnel". Estos dos contratos fueron firmados por Condori. Según las denuncias, con un sobreprecio de 18 millones de dólares. Si bien se instruyó anular los contratos luego de reconocer "inconsistencias" por parte de las autoridades, hasta la fecha no existen responsables de las supuestas irregularidades.

El director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Juan León Cornejo, calificó de "chantaje ilegal e inmoral" esa acción de la Gobernación de Tarija.

Advirtió que los medios de comunicación sufren un acoso en tres niveles: Nacional, con la preparación de una ley que restringe el acceso a la información pública y las presiones contra medios independientes, como Página Siete; departamental, donde se crean restricciones a la publicidad oficial como en Tarija. En el nivel municipal, recordó que el Gobierno local de Santa Cruz de la Sierra proyecta una norma de control a los contenidos informativos de los medios bajo el argumento de la protección a la niñez y la adolescencia⁴³.

El director del diario Nuevo Sur, Virginio Lema, declaró por ese entonces que su medio no trabaja ni trabajará con el gobernador interino. "Don Lino, yo no voy trabajar para usted nunca porque es una vergüenza lo que hace y si tenemos que hacer-

43 Gobernación de Tarija niegan publicidad a medios que cuestionan, <http://emebol.com/ver-noticia.php?val=3517>

nos a un lado de la publicidad lo haremos, pero seguiremos informando”, le advirtió⁴⁴.

Explicó que Nuevo Sur nunca tuvo contratos importantes con la Gobernación y recordó que cuando ocurrió lo de la “Condorvía” informaron como todo medio debe informar, pero dijo que este hecho de extorsión nació en esa denuncia.

Respecto a la situación económica y a los millonarios contratos publicitarios, recordó el titular de tapa de El Bermejeño, que señala que ocho de cada diez personas de esa región están enfermas del estómago por agua insana, “mientras aquí le ponen 50 millones en publicidad”.

Sobre la cláusula extorsiva en contratos publicitarios, dijo que esto va más allá del propietario del medio. Si bien la cláusula ya la firmaron varios medios, aseguró que muchos pueden no haberla leído. Dijo que el hecho daña la integridad del trabajo periodístico. En este contexto, llamó a los medios y sindicatos a lograr la eliminación de la cláusula.

La Gobernación prohibió, por orden de Condori, la circulación del periódico Nuevo Sur en sus oficinas, luego de que, tras el escándalo de la “Condorvía”, este medio publicó cuestionamientos a la legitimidad de Condori y a su gestión de más de dos años y medio. “Condori fue electo asambleísta de la zona Alta de Tarija con menos de 900 votos, de los más de 200 mil emitidos, pero administra más de 4.000 millones de bolivianos anuales y sin rendir cuentas”, decía la publicación⁴⁵.

44 Darío Gareca defiende plan comunicacional extorsivo y APLP propone Ley que regule publicidad, <http://elpaionline.com/index.php/edicion-virtual/item/99824-dario-gareca-defiende-plan-comunicacional-extorsivo-y-aplp-propone-ley-que-regule-publicidad>

45 Darío Gareca defiende plan comunicacional extorsivo y APLP propone Ley que regule publicidad, <http://elpaionline.com/index.php/edicion-virtual/item/99824-dario-gareca-defiende-plan-comunicacional-extorsivo-y-aplp-propone-ley-que-regule-publicidad>

El lunes 9 de septiembre de 2013, el periódico Nuevo Sur de Tarija, informó sobre un debate organizado por organizaciones de prensa de esa ciudad para hablar sobre la estrategia comunicacional de la Gobernación tarijeña⁴⁶.

Entre los invitados estaba el gobernador interino, Lino Condori Aramayo, el presidente de la Asamblea Departamental, Fortunato Llanos Jancko, el alcalde de la ciudad de Tarija, Oscar Montes Barzón, el secretario de Coordinación de la Gobernación, Darío Gareca Cardozo; y el ejecutivo de Villa Montes, Rubén Vaca Salazar. Ninguno se presentó al evento.

El 10 de noviembre de 2013, Rafael Sagárnaga, director del periódico El Nacional; Virgilio Lema, Director del Nuevo Sur; y Roberto Gutiérrez, director de Plus TV, los tres de Tarija, denunciaron que la corrupción desbordó la Gobernación de ese Departamento y señalaron que las autoridades de esa instancia decidieron vetar publicidad estatal a los medios para evitar que difundan irregularidades. Sagárnaga subrayó que cada mes estalla un caso de corrupción.

2.8. Nueve de cada 10 bolivianos de publicidad estatal benefició a “El Andaluz”.

El 18 de agosto de 2015, la Agencia de Noticias Fides (ANF) informó que, durante el año 2014, casi 9 de cada 10 bolivianos, destinados por la Gobernación de Tarija a publicidad en medios impresos, fueron entregados únicamente al periódico “El Andaluz”⁴⁷.

46 Periodistas en Tarija alertan de estrategia para desacreditar a medios, <http://www.diarionuevosur.com/index.php/actualidad/politica/1678-periodistas-en-tarija-alertan-de-estrategia-para-desacreditar-a-medios>

47 Un solo periódico recibió 87% de publicidad oficial en Tarija, <http://www.eldeber.com.bo/bolivia/medio-recibio-87-publicidad-oficial.html>

Si bien en el 2015 disminuyó la publicidad en ese medio, continuó siendo el prioritario para la gestión de Lino Condori. Recibió el 60% de la publicidad prevista para la prensa escrita.

El 87.7%, primero; y el 64.5%, después, del presupuesto para publicidad impresa definido por la Gobernación fue a manos de una sola entidad, subrayó ANF.

El monto total entregado por la Gobernación a dicho medio impreso a lo largo de 17 meses fue de un millón 635 mil bolivianos.

Periódicos más antiguos y con mayor circulación como “Nuevo Sur”, “El Nacional” o “El País” recibieron en el mismo periodo de tiempo, 112 mil, 43 mil y 287 mil bolivianos, respectivamente.

El presupuesto departamental de publicidad impresa entre enero de 2014 y mayo de 2015 fue de dos millones 179.964 bolivianos. De ese total, solo un saldo de 544.035 fueron asignados a cinco diarios: Nuevo Sur”, “El Nacional”, “ El País” y “El Provincial”.

Entre enero y mayo de 2015, coincidiendo con la campaña electoral, la dirección de Comunicación a cargo de Juan Carlos Lima, elevó la dotación presupuestaria a 1.193.474 bolivianos, de los que un 64,57%, es decir 770.670 bolivianos, fue para “El Andalúz”. Al mismo tiempo se elevó ligeramente la participación en los otros cinco diarios.

Según informaciones obtenidas, el periódico Andalúz, que apenas tiene un tiraje de 350 ejemplares, pertenece a un grupo “empresarial” conformado por los allegados a Lino Condori (el MAS tarijeño).

El otro medio de Tarija de línea masista que recibió y recibe bastante publicidad estatal es el Periódico. “La única cuenta publicitaria de este medio es, precisamente, el Ministerio de Comunicación. Cada domingo publica una separata full color,

pese a que el tiraje conocido en Tarija de este medio, al igual que El Andalúz, no supera los 250 periódicos diarios”, informaron periodistas de la región.

En ambos casos, los porcentajes son elocuentes, el 91% de la facturación de publicidad de El Periódico entre enero a agosto de 2016 es el Ministerio de Comunicación..

Este dato es muy similar al de El Andalúz, que entre 2014 y 2015 facturó el 89% a la Gobernación de Lino Condori⁴⁸.

2.9. El castigo de veto publicitario también se aplicó en Sucre.

La práctica de prohibir publicidad estatal en determinados medios se reprodujo también en Sucre, donde el gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquiza (MAS); y el alcalde de La Capital, Iván Arciénega (MAS), vetaron a los medios de comunicación que consideran opositores, entre ellos el diario Correo del Sur.

El 19 de agosto de 2016, Marco Antonio Dipp, director de este matutino que se edita en Sucre, pidió al Alcalde de esa ciudad, Iván Arciénega, levantar la prohibición de difundir incluso avisos de bien social en las páginas de Correo del Sur.

“Dicha medida, que ha sido aplicada de manera paralela por las instituciones públicas del nivel nacional y subnacional, aproximadamente desde finales de mayo del presente año, ha afectado también a los avisos de bien social, que dejaron de ser enviados al diario que dirijo para su respectiva publicación”, subraya Dipp en su carta.

Tratándose de avisos de bien social, indica que “tendrían que estar exentos de determinaciones coyunturales de carácter

48 ANF devela que un diario se llevó 87 % de anuncios de Lino, <http://el-paonline.com/index.php/edicion-virtual/item/183394-anf-deve-la-que-un-diario-se-llevo-87-de-anuncios-de-lino>

partidario” por lo que se ofrece a seguirlos publicando gratuitamente.

El secretario general del municipio, Enrique Leño, aseguró a ANF que es “absolutamente falso” que se hubiera emitido una instructiva verbal o escrita en ese sentido, aunque admitió que actualmente el avisaje de la Alcaldía se pone en el diario Libertador porque, según dijo, los precios son más bajos que los de Correo del Sur.

El diario El Libertador circula desde hace unos tres meses en Sucre, mientras que Correo del Sur tiene casi 30 años de existencia.

“De parte del despacho no ha salido ningún comunicado, ni verbal mucho menos escrito, que no se pudiera contratar y poner avisos en Correo del Sur”, dijo Leño en comunicación con ANF. “Hemos comparado precios de los dos periódicos que tenemos, uno nos cobra menos, esperemos que de esa manera se puedan bajar los costos”, señaló agregó el funcionario de la Alcaldía.

Cuando se le consultó si se ha considerado el tiraje del nuevo periódico, respondió: “No hacemos el conteo de cuántos periódicos venden, pero al ser de circulación nacional, la normativa nos permite viabilizar eso, caso contrario, somos sujetos a normativas administrativas”⁴⁹.

Leño aseguró que “de ninguna manera” se busca “asfixiar” económicamente a Correo del Sur. “Nuestro Alcalde es un hombre muy amplio, no ha dado ninguna instrucción, ni verbal, ni escrita para esta situación”, finalizó.

49 Correo del Sur denuncia que el alcalde de Sucre instruye quitar toda la publicidad a ese medio, <http://www.paginasiete.bo/nacional/2016/8/22/correo-denuncia-alcalde-sucre-instruye-quitar-toda-publicidad-medio-107184.html>

2.10. Un quincenario denunció al TSE en Argentina.

El mal ejemplo del veto publicitario también fue reproducida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a mediados de 2014, en Argentina, contra un medio que se edita en el país vecino y difunde información sobre bolivianos.

El quincenario Visor Boliviano, mediante su página editorial, denunció en junio de ese año que sufrió un veto de la publicidad oficial sobre el empadronamiento biométrico en Argentina por haber mostrado algunos lados negativos del registro y tras difundir una entrevista a la socióloga Silvia Rivera Cusicanqui, que es crítica al gobierno del presidente Evo Morales.

Juan Carlos Estrada Vásquez, jefe de redacción de Visor Boliviano, dijo que en dos ediciones, el Órgano Electoral Plurinacional difundió publicidad en su medio y luego prescindieron del contrato, pese a que es el único quincenal boliviano que se difunde a nivel nacional en el vecino país. El OEP argumentó el costo, los plazos y la distribución, según la denuncia.

“No somos ingenuos y entendemos muy bien que es una decisión política, y una de las muestras más claras la contamos en el número de la primer quincena del mes de mayo, cuando nuestro contacto con Leonilda Zurita fue interrumpido por el cónsul Ramiro Tapia con el cuerpo y las palabras ‘estos son los que le pegan al Evo’, cambiando así la actitud de Leonilda, que nos estaba atendiendo cortésmente. Ese ‘pegar al Evo’ se entiende -según el Cónsul- una publicación en la cual la socióloga boliviana Silvia Rivera Cusicanqui desarrolla otra mirada del gobierno actual del Presidente”, dice El Visor en uno de los párrafos de su editorial.

En respuesta, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral de ese entonces, Vilma Velasco, dijo a ERBOL que el cónsul Tapia no hace las contrataciones de publicidad y el OEP trabaja con personal dependiente.

“Nuestro personal está muy bien capacitado para trabajar con independencia y transparencia (...) además uno de los requisitos que vimos para contratar a nuestro personal fue que no tengan ninguna militancia, nosotros hemos contratado directamente a nuestros connacionales en Argentina para esta tarea (de la difusión de publicidad), por lo tanto no es el cónsul el que hace, sino nuestro coordinadores y encargado de comunicación”, apuntó⁵⁰.

3. El gobierno “veta” el apoyo económico de la opinión pública a ERBOL

Después que la periodista Amalia Pando denunciara el uso del dinero público para premiar y castigar medios de comunicación social, parte de la sociedad civil de La Paz organizó un grupo en Facebook denominado “Defendamos a Erbol y Amalia Pando”.

Este grupo, que nació en las redes sociales, convocó a acciones para evitar que la periodista deje Erbol e impedir que el gobierno “asfixie” y doblegue a este medio.

El miércoles 19 de agosto de 2015 el grupo saltó de lo virtual a lo real y desarrolló una reunión para respaldar a Erbol y Pando, y defender la libertad de expresión.

El encuentro fue llevado adelante en un salón del museo San Francisco de La Paz, a donde también invitaron al director ejecutivo de este medio, Augusto Peña, quien explicó la situación económica de la radio⁵¹.

50 Medio boliviano denuncia que sufrió veto publicitario, <http://www.elpaonline.com/index.php/2013-01-15-14-16-26/nacional/item/128927-medio-boliviano-denuncia-que-sufrio-veto-publicitario>

51 Colectivo ciudadano respalda a ERBOL y anuncia marchas, http://www.erbol.com.bo/galeria/colectivo_ciudadano_respalda_erbol_y_anuncia_marchas#/0

En medio de gritos como “callar a ERBOL significa callar al pueblo”, “Amalia no se va, Amalia no se va” y “el pueblo no acepta la renuncia de Amalia Pando”, los asistentes asumieron tres acciones:

1.- Abrir una cuenta bancaria para salvar a ERBOL de la asfixia económica gubernamental. (Número de cuenta: 201-3080801-3-33, Banco de Crédito de Bolivia BCP)

2.- Hacer un plantón frente al edificio de ERBOL La Paz el próximo lunes 24 de agosto para exigir que el Directorio de este medio de comunicación no acepte la renuncia de Amalia Pando.

3.- Realizar una marcha de protesta en defensa de la libertad de expresión el próximo martes 25 de agosto en la ciudad de La Paz. (La concentración está prevista para las 18.30 en la plaza San Francisco)

Tras el encuentro, que maduró en Facebook, la activista Carolina Rojas declaró: “Nosotros estamos pidiendo al gobierno de Evo Morales que se respete la libertad de expresión y la democratización de la publicidad. Realmente estamos sorprendidos con la cantidad de gente que ha asistido a esta reunión, hemos visto desde artesanos que comprometieron su apoyo económico a ERBOL, hasta abogados que se ofrecieron para defender a ERBOL presentando un amparo constitucional, porque todos estamos aquí para defender la libertad de expresión”.

El movimiento ciudadano causó la reacción inmediata del gobierno de Evo Morales, que a través del Ministerio de Trabajo emitió un comunicado atemorizante:

COMUNICADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO

Medios habilitan mecanismos de posible lavado de dinero

El Ministerio de Trabajo recuerda que están vigentes en el país normas para el control del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otros delitos financie-

ros. Es importante destacar estas normas cuando hay medios de comunicación que abren cuentas bancarias para supuestamente recibir apoyo de la población. Sin embargo, éstos pueden ser canales de lavado de dinero. Además, estas recaudaciones tienen la finalidad de mantener la confrontación con el Gobierno de Evo Morales, en una abierta acción política de oposición⁵².

Las normas establecidas en el país tienen la finalidad de detectar cualquier actividad vinculada al lavado de dinero, de modo que toda persona tiene la obligación de declarar el origen y destino de los fondos que introduce al sistema financiero. Estas obligaciones no pueden relajarse en recaudaciones con fines políticos. Las entidades financieras están obligadas a conocer y registrar los datos personales de sus usuarios, profesión, actividad económica, lugar de trabajo, nivel de ingresos, entre otros. No se pueden habilitar canales libres de recaudación que pueden dar lugar al lavado de dinero.

Los organismos internacionales del imperialismo, como la CIA y otros, pueden utilizar esos mecanismos para continuar con sus ataques en contra del Gobierno del Proceso de Cambio y continuar con sus procedimientos de Golpes Suaves.

Las normas que controlan en el país el lavado de dinero son las siguientes:

La Ley N°1768 de 10/03/97 de Modificaciones del Código Penal. La Ley N° 004 de 31/03/2010 Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz". La Ley 170 de 9 de septiembre de 2011 de modificaciones al Código Penal "Financiamiento del Terrorismo".

52 Ministerio de Trabajo: Recaudaciones de medios buscan confrontar a Evo, <http://www.erbol.com.bo/noticia/politica/21082015/ministerio-de-trabajo-recaudaciones-de-medios-buscan-confrontar-evo>

La Ley 262 de 30 de julio de 2012, Régimen de Congelamiento de Fondos y Otros Activos de Personas Vinculadas con Acciones de Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo, modificaciones al Código Penal, "Uso indebido de Información Privilegiada", "Terrorismo", "Legitimación de Ganancias Ilícitas" y "Financiamiento del Terrorismo".

El Decreto Supremo N° 24771 de 31 de julio de 1997 que aprueba el Reglamento de la Unidad de Investigaciones Financieras.

El Decreto Supremo N° 29681 de 20 de agosto de 2008 sobre las operaciones de internación y salida física de divisas del territorio nacional.

El Decreto Supremo N° 0910 de 15 de junio de 2011 que reglamenta el régimen de infracciones y los procedimientos para la detección y aplicación de sanciones administrativas en lo concerniente a la Legitimación de Ganancias Ilícitas por parte de la UIF y ASFI.

El Decreto Supremo N° 1233 de 16 de mayo de 2012 que reglamenta el Sistema de Declaración de Bienes y Rentas
El Decreto Supremo N° 1553 de 10 de abril de 2013, procedimientos complementarios relacionados con el Régimen de Congelamiento de Fondos y otros Activos.

La Resolución N° UIF/DIR/001/08 de 23 de junio de 2008 y UIF/001/2010 de 19 de agosto de 2010 emitidas por la UIF, referente a listas de Personas Expuestas Políticamente (PEP's).

Circular UIF/004/2008 de 7 de mayo de 2008.

Resolución UIF/001/2010 de 19 de agosto de 2010, elaboración de listas PEP.

La Resolución Administrativa UIF/001/2013 de 2 de enero de 2013 que aprueba las modificaciones al "Manual de Procedimientos Operativos para la Detección, Prevención, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos

Precedentes con Enfoque Basado en Gestión de Riesgo para el Sistema Financiero y Servicios Auxiliares”.

La Resolución Administrativa UIF/002/2013 de 2 de enero de 2013 que aprueba las modificaciones al “Instructivo Específico para Entidades de Intermediación Financiera con Enfoque Basado en Gestión de Riesgo”.

La Resolución Administrativa UIF/023/2012 de 15 de abril de 2013, que aprueba el Instructivo Específico para el Congelamiento Preventivo de Fondos y Otros Activos.

La Circular ASFI/143/2012 de 14 de septiembre de 2012, modificación al Reglamento para la Prevención, Detección y Control de Legitimación de Ganancias Ilícitas.

La Ley N°393 del 21 de agosto de 2013 “Ley de Servicios Financieros”.

El Decreto Supremo 1969 del 9 de abril de 2014 “Reglamento de la transformación de la Unidad de Investigaciones Financieras - UIF”.

El objetivo del gobierno, a través del comunicado, fue clarísimo: impedir que la población aporte su dinero a ERBOL para terminar de asfixiarla económicamente. Las denuncias de periodistas y organizaciones de prensa se confirmaban: el gobierno no sólo usaba el dinero público para presionar a medios de comunicación, usaba todo su poder para acabar con medios independientes y libres.

Esta arremetida gubernamental causó indignación social y protestas.

El sábado 22 de agosto de 2015, después de conocer el reciente comunicado del Ministerio de Trabajo, el presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Ronald Grebe, afirmó que el Gobierno intenta atemorizar a los ciudadanos que, de manera voluntaria, decidieron abrir una cuenta bancaria y hacer aportes económicos a la emisora Erbol

para salvarla de la asfixia económica impuesta por el régimen de Evo Morales.

“Es una nueva forma de atemorizar a los posibles donantes o contribuyentes, que quieren que Erbol siga en el aire, que siga emitiendo sus programas, en idiomas originarios y castellano. No veo por qué el Gobierno quiera que una institución de tantos años sea silenciada en este momento (...) Vivimos en total libertad para actuar como personas e instituciones en favor de la libertad de expresión”, dijo Grebe, en entrevista con Erbol.

El dirigente de los periodistas propuso la existencia de una nueva normativa que determine que los recursos que se invierten en publicidad estatal sean distribuidos por igual en todos los medios de comunicación, sean éstos afines o no al Gobierno de turno.

“Estamos necesitados de una ley que norme todo el tema referido a la publicación oficial, así como se está haciendo en diferentes países, para que el uso de estos recursos no sea discrecional, sino igualitario”, afirmó.

Asimismo pidió al Gobierno de turno, no politizar la problemática y la tensión que se vive actualmente con los medios de comunicación.

“En diferentes gobiernos, lo único que ha hecho Erbol es defender la libertad de expresión, se ha defendido la democracia. Que pena que el Gobierno trate de politizar de esta manera el tema, sólo para atacar a un medio que trabaje a favor de las grandes mayorías”, concluyó Grebe⁵³.

Paralelamente, el colectivo ciudadano “Defendamos a Erbol y Amalia Pando” declaró, en respuesta al Ministerio de Trabajo,

53 ANPB: Gobierno intenta atemorizar a donantes, http://www.erbol.com.bo/noticia/social/22082015/anpb_gobierno_intenta_atemorizar_donantes

que “el pueblo quiere hacer escuchar su voz, la gente es libre de donar su dinero a quien quiera y cuando quiera”.

“No estamos buscando la confrontación, nunca hemos pensado en eso. Este sentimiento ha surgido por defender a nuestra voz que es Amalia Pando. Y la gente ha decidido de manera voluntaria aportar para salvar a Erbol de esta asfixia económica y ha sido la gente que ha decidido abrir esta cuenta bancaria, nunca se ha pensado en otra cosa”, afirmó.

“Pensamos en el futuro de nuestros hijos, en qué país van a vivir si no tienen la libertad de expresión y de información. Han llamado y dijeron que con más ganas van a aportar ahora para salvar a Erbol, entonces no hay ninguna doble intención. Sabemos que el lunes se va a reunir el directorio (de Erbol) y vamos a ir a la puerta de la radio para pedir que no se acepte la renuncia de Amalia Pando y el martes tenemos una marcha, con la que vamos a defender nuestra libertad de expresión”, aseguraron representantes del Colectivo.

El Defensor del Pueblo de entonces, Rolando Villena, también expresó su malestar por la decisión del gobierno de Evo Morales de asfixiar económica a medios independientes.

Villena declaró el lunes 24 de agosto de 2015 que los medios de comunicación, como Erbol, que se sienten afectados en sus derechos o son objeto de una “asfixia económica” tienen derecho a pedir aportes de la comunidad.

“Es un recurso legítimo, porque si un medio de comunicación, como es la Red Erbol, que está presente en todo el país, percibe o está convencido que hay una afectación a su derecho a la libre información, en su trabajo periodístico, (en su) investigación, y cuando éstas podrían ser resentidas o controladas, o como ya se dijo incluso objeto de una suerte de asfixia económica, están en su derecho a pedir que la comunidad se manifieste con aportes y sus firmas”, dijo Villena, en conferencia de prensa.

En referencia al comunicado del Ministerio de Trabajo que señaló que los aportes ciudadanos en favor de un medio pueden ser usados incluso por la CIA estadounidense, añadió que “en un Estado de Derecho no tendríamos que ver fantasmas donde no existen”.

Sobre este mismo tema, el director ejecutivo de Erbol, Augusto Peña, afirmó que en este medio de comunicación siempre se ha respetado la libertad de expresión y que, si por defender este principio será encarcelado, él está dispuesto. “Si van a ponernos en la cárcel por defender la libertad, vamos a estar en la cárcel”, manifestó⁵⁴.

La mañana del lunes 24 de agosto de 2016 centenares de personas llegaron a la sede de Erbol para manifestar su apoyo a la emisora y a Amalia Pando. Con lágrimas, decenas de ciudadanos y ciudadanas pidieron a Pando no dejar la radio.

Al mismo tiempo, convocaron a una concentración y marcha por la Libertad de Expresión para las 18.30 del martes 25 de agosto de 2015 en la plaza San Francisco de La Paz.

Durante la organización del movimiento, diferentes ciudadanos se pronunciaron respecto a la amenaza del gobierno. “Nuestros aportes son voluntarios y nadie nos puede coartar”, dijo Marina Luz Virreira. “Yo hago con mi dinero lo que quiera y no creo que haya una ley que evite sacar dinero de mi bolsillo”, agregó otro ciudadano⁵⁵.

Sin embargo, el comunicado del Poder Ejecutivo logró el efecto deseado, atemorizó y cohibió a miles de ciudadanos

54 Defensor del Pueblo dice que ERBOL está en su derecho de pedir aportes, http://www.erbol.com.bo/noticia/social/24082015/defensor_del_pueblo_dice_que_erbol_esta_en_su_derecho_de_pedir_aportes

55 Defensor del Pueblo dice que ERBOL está en su derecho de pedir aportes, http://www.erbol.com.bo/noticia/social/24082015/defensor_del_pueblo_dice_que_erbol_esta_en_su_derecho_de_pedir_aportes

dispuestos a aportar dinero para mantener la independencia y libertad de Erbol. Al final venció el miedo a posibles represalias y persecución, aunque la radioemisora logró recaudar Bs16.144⁵⁶, en una acción popular inédita en el país.

3.1. Organizaciones de prensa y periodistas señalan el deterioro de la libertad de expresión en Bolivia

El periodista Raúl Peñaranda, exdirector de Página 7 y en la actualidad editor de la Agencia de Noticias Fides, se declaró preocupado el lunes 11 de octubre de 2015 por el estado de los medios de comunicación en Bolivia.

En una entrevista concedida al Centro Knight para el Periodismo en las Américas antes de recibir el Premio Maria Moors Cabot⁵⁷, Peñaranda manifestó que “el gobierno ha logrado acabar casi por completo con los medios independientes”.

“Ahora esos son solo un puñado. El gobierno, a través de empresarios amigos, ha comprado medios y les ha cambiado la línea editorial. También los ha presionado, con agresiones verbales y entidades estatales, para debilitarlos y atemorizarlos. Finalmente los ha cooptado, con millones de dólares para publicidad gubernamental. Esos medios, para obtener esa publicidad, y luego seguir recibéndola, también cambiaron su línea editorial y se volvieron órganos de prensa pro-gobierno”, agregó.

56 Erbol seguirá con su línea informativa y Pando pide apoyar a la emisora, http://www.erbol.com.bo/galeria/erbol_seguira_con_su_linea_informativa_y_pando_pide_apoyar_la_emisora#/0

57 Raúl Peñaranda denuncia que el gobierno acabó con casi todos los medios independientes, <http://www.paginasiete.bo/sociedad/2015/10/12/raul-penaranda-denuncia-gobierno-acabo-casi-todos-medios-independientes-73243.html>

En esa misma línea, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que aglutina a propietarios y directores de medios escritos, expresó su preocupación en el informe “Control Estatal de los medios de comunicación”.

En el documento, aborda los ataques de las autoridades gubernamentales a periodistas y a medios.

En ese sentido, recordó que el 29 de agosto de 2013 el presidente Evo Morales calificó a “algunos periodistas” de representar a “instrumentos del imperio y la clase política”.

Para graficar su denuncia, la ANP describió una actitud de Morales. Un día, un periodista preguntó si responderá a un cuestionario de la Fiscalía sobre la violencia ejercida contra marchistas indígenas, en septiembre de 2011, el Presidente respondió: “Compañero de la prensa, ya hemos aprendido y no vamos a entrar al juego de algunos periodistas que son los mejores instrumentos del imperio y la clase política”.

También mencionó el proceso iniciado por el Ejecutivo contra los periódicos El Diario, Página Siete y la Agencia de Noticias Fides (ANF), supuestamente por promover la difusión de mensajes racistas en contra de Morales.

“Existe una demora de dos años y el caso aún se mantiene en investigación. La estrategia gubernamental consiste en abrir procesos y mantenerlos sin avance ni resolución, a manera de una estrategia psicológica para atemorizar a los medios y obligarlos a una autocensura en la línea editorial”, indica el documento⁵⁸.

En torno a la distribución de la propaganda estatal, la ANP aseguró que es una práctica generalizada empleada para “pre-

58 Informe “Control Estatal de los medios de comunicación”, <http://www.alianzaregional.net/wp-content/uploads/Art%C3%ADculo-XI-II-Control-Estatal-de-los-Medios-de-Comunicaci%C3%B3n3.pdf>

miar a quienes ofrecen líneas editoriales favorables y castigar a los medios independientes. Esta política de gobierno ha sido señalada de manera explícita por la ex ministra de Comunicación, Amanda Dávila”.

El 21 octubre de 2015, el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, afirmó que esa Relatoría estaba en un diálogo con el Estado boliviano sobre el uso de la publicidad gubernamental ante una supuesta “asfixia económica” a algunos medios de comunicación en el país⁵⁹.

Lanza participó en una videoconferencia “Webinario: Libertad de expresión y regulaciones que garantiza la diversidad y el pluralismo”. La Agencia de Noticias Fides consultó al Relator sobre la situación de la libertad de expresión en Bolivia y las denuncias de “asfixia económica” a los medios de comunicación.

“La Relatoría está en un diálogo con el Estado boliviano sobre el uso de la publicidad gubernamental”, respondió Lanza. Añadió que su oficina en la CIDH “ha recibido información de la sociedad civil” respecto al uso de la publicidad gubernamental para presionar a los medios de comunicación.

El Relator no quiso dar mayores detalles y anunció un informe que tendría que haber presentado en febrero de este año. Hasta la fecha, no se produjo ninguna publicación. Sin embargo, llegó a Bolivia entre el 24 y 26 de agosto del presente año. En esa ocasión declaró que el Gobierno no debe discriminar a los medios de comunicación en el reparto de los avisos publicitarios del Estado.

59 Relator de la CIDH habló sobre publicidad gubernamental en Bolivia, http://www.eldiario.net/noticias/2015/2015_10/nt151021/nacional.php?n=102&-relator-de-la-cidh-hablo-sobre-publicidad-gubernamental-en-bolivia

“El Gobierno no está obligado a poner publicidad, lo que sí está obligado es que cuando, haciendo publicidad oficial, lo haga con criterios claros y objetivos y no discriminatorios. Esa es la definición”, declaró Lanza a los medios en La Paz⁶⁰.

A causa de estas declaraciones, el Presidente boliviano Evo Morales atacó al visitante. “Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH dependiente de la OEA, se suma al “#CártelDeLaMentira” en #Bolivia (sic)”, escribió Morales en su cuenta de Twitter.

“Defender a algunos medios de comunicación que hacen periodismo con la mentira y la difamación NO es defender la libertad de expresión”, agregó.

Morales se expresó de esa forma después de que Lanza señalara en su visita a La Paz que llamar “cártel de la mentira” a los medios no contribuye a crear un clima de respeto y tolerancia⁶¹.

“Los funcionarios públicos tienen derecho a expresarse, opinar y refutar información que tienen que complementar o responder, pero lo tienen que hacer con cuidado porque cada definición que hace un funcionario público es un señalamiento, entonces creemos que con declaraciones gruesas no se contribuye”, dijo Lanza.

El 4 de octubre de 2015, la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP), en su Asamblea General en Charleston (Carolina del Sur, EE.UU.), denunció que Latinoamérica ha sufrido en el último año un aumento de medidas oficiales encaminadas a asfixiar la actividad periodística crítica e independiente.

60 Relator de CIDH rechaza discriminación en reparto de la publicidad en el país, <http://eju.tv/2016/08/relator-de-cidh-rechaza-discriminacion-en-reparto-de-la-publicidad-en-bolivia/>

61 Evo Morales dice que relator de la CIDH es parte de un “cártel de la mentira”, http://www.la-razon.com/nacional/Evo-Morales-relator-CIDH-mentira_0_2552144846.html

Claudio Paolillo, presidente de la Comisión para la Libertad de Prensa e información de la SIP, dijo en la ocasión que en muchos países de la región los “mandatarios han asumido una posición cuasimonárquica profundamente antidemocrática”.

Citó, en primer lugar, a Argentina, un país cuyo Gobierno “ha batido récords en gasto de propaganda oficial y continúa utilizando la publicidad que paga el Estado para castigar a medios críticos e independientes y premiar” a los afines.

Lo mismo ocurre, manifestó Paolillo, en Bolivia, donde el Gobierno del presidente Evo Morales utiliza la publicidad para “presionar a medios independientes”⁶².

Los periodistas bolivianos se manifestaron en reiteradas ocasiones sobre el arbitrario uso de la propaganda estatal. Denunciaron que vulnera al menos dos artículos de la Constitución Política del Estado, la Convención Americana de Derechos Humanos y la opinión consultiva 5/85 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Declaración de Chapultepec⁶³.

El 15 de abril del presente año, el periodista Humberto Vacaflor escribió que *“los gobiernos del “socialismo del siglo XXI” han abusado de la discriminación política en la asignación de los recursos de la publicidad del Estado”*.

“No solamente han comprado medios, han usado las armas de la presión tributaria, han ofendido al periodismo, sino que han tratado de asfixiar a los medios independientes negándoles la publicidad estatal”, agregó.

62 SIP alerta sobre aumento presión para asfixiar a medios críticos en América Latina, <http://www.wradio.com.co/noticias/internacional/sip-alerta-sobre-aumento-presion-para-asfixiar-a-medios-criticos-en-a-latina/20151004/nota/2956971.aspx>

63 Periodistas denuncian que el gobierno vulnera convenios, <http://www.paginasiete.bo/nacional/2015/8/12/periodistas-denuncian-gobierno-vulnera-convenios-66302.html>

“En Bolivia se sabe de medios que han sido multados con saña hasta que fueron doblegados. Medios que han sido vendidos porque el SIN los estaba ahogando con deudas inventadas, y cuando se produjo la venta, las deudas desaparecieron”, prosiguió.

El 29 de agosto de 2015, la Sociedad Interamericana de Prensa cuestionó otra vez al Gobierno boliviano por la utilización de la publicidad oficial como instrumento para presionar a los medios de comunicación, en particular a los que critican al presidente Evo Morales⁶⁴.

La SIP observó la discriminación contra la red Erbol, que padece una grave situación económica luego de que el gobierno le niega publicidad, castigándola por su posición editorial crítica e independiente. El medio denunció que varios de sus anunciantes privados dejaron de publicitar por temor a represalias.

El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, llamó al gobierno a “dejar de utilizar la publicidad oficial como método de premio y castigo”. Mohme agregó que “la libertad de prensa requiere de transparencia y reglas claras, y con métodos equitativos y técnicos para el uso de los recursos públicos en la inversión de publicidad”.

El presidente la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Claudio Paolillo, calificó de “malversación de fondos públicos y un abuso de poder político la discriminación arbitraria en el otorgamiento de publicidad oficial”.

La activista de Mujeres Creando, María Galindo, se pronunció sobre el veto publicitario, en su columna del 12 de agosto de 2015, publicado en Página Siete⁶⁵. “Hace poco menos de un

64 La SIP critica utilización de publicidad contra medios, <http://www.eldeber.com.bo/bolivia/sip-critica-utilizacion-publicidad-medios.html>

65 La publicidad como censura o como negocio millonario, <http://eju.tv/2015/08/la-publicidad-como-censura-y-como-negocio-millonario/>

año, en Argentina se juntaron todos los medios de comunicación y ganaron un amparo constitucional que obligaba al gobierno de Cristina Kirchner a colocar el pauteo publicitario del Estado en una escala proporcional a todos los medios de comunicación sin excluir a ninguno”, escribió.

“Lo lograron demostrando que la publicidad funciona como mecanismo de censura y demostrando, además, que el pauteo publicitario del Estado es diferente que el privado, pues al ser fondos públicos no pueden ser manejados como instrumento para la manipulación de contenidos”, manifestó.

“Cuando el gobierno usa la publicidad como mecanismo de presión, no estamos frente a un asunto menor que depende de la decisión discrecional de cualquier director de comunicación. Como lo dijo el propio Vicepresidente, estamos frente a un arma de coartación de la libertad de expresión. Estamos frente a un arma de presión que está siendo usada para asfixiar medios de comunicación, para vetar periodistas sin necesidad de perseguirlos abiertamente”, prosiguió.

“Este no es un proceso nuevo, sino que ha sido un lento y continuo proceso a lo largo de todo el gobierno de Evo Morales, un proceso selectivo que va al detalle, un proceso que tiene además resultados palpables como son el control vía directa e indirecta de por lo menos el 80% de todos los medios entre radiales, televisivos y escritos. Con un panorama así, el gobierno no debería preocuparse por una pequeña radio, inclusive no debería preocuparse por un columnista o un radialista cualquiera porque siendo su control tan aplastante esas pequeñas voces parecieran tener poca o ninguna relevancia”, agregó.

“Sin embargo, la baja calidad periodística, la baja calidad estética, la repetitividad y el monólogo que producen los medios afines al gobierno no son suficientes, el público sostiene y busca medios por fuera del esquema. El control de la opinión libre,

de la información libre se les hace, aunque parezca mentira, cada día más difícil”, subrayó.

“El gasto en campañas publicitarias es a todos los ojos millonarios, la necesidad de producir campañas publicitarias sin medida que no sólo responde a la necesidad de control de la opinión pública, sino a la necesidad de generar mecanismos para el gasto de dinero y la transferencia fácil de fondos públicos. El aparato comunicacional gubernamental no es una cuestión de convicciones de los buenos contra los malos, de los paladines de la revolución contra la derecha boliviana, es un proyecto de enriquecimiento a manos llenas de una serie de personajes que están usando sus cargos para eso”, indicó Galindo.

También expresó su punto de vista sobre este tema el periodista y expresidente Carlos Mesa, en una entrevista con Página 7⁶⁶.

“Sería una ingenuidad decir que tenemos una libertad de expresión plena. En primer lugar, hay formas de restricción que tienen que ver, por ejemplo, y además no hay ningún secreto en ello porque el Gobierno lo ha planteado así, que aquellos medios que no son amigos del Gobierno no tienen por qué recibir publicidad gubernamental. El Gobierno no es “dueño” de la publicidad que genera por dos razones: uno, porque utiliza dinero de quienes somos contribuyentes, y dos, porque se supone que el trabajo del Gobierno es una representación del trabajo del Estado y la publicidad que hace referencia a acciones del Estado boliviano representadas por el Gobierno no pueden ser asumidas como un patrimonio del Gobierno”, declaró Mesa el 12 de junio del presente año.

66 Carlos Mesa: “Periodistas y medios estamos viviendo una sensación de miedo”, <http://eju.tv/2016/06/carlos-mesa-periodistas-medios-estamos-viviendo-una-sensacion-miedo/>

4. ¿Cómo justifican los gobernantes el veto publicitario?

Para respaldar sus decisiones contra los medios vetados lanzaron las siguientes acusaciones:

- “Mienten”.
- No defienden “los intereses nacionales”.
- “Insultan”
- Son partidos políticos
- Hacen campaña política
- No son independientes

También indicaron “sus criterios” de distribución de publicidad:

- Definición de públicos meta y el alcance del medio de comunicación.
- Democratización de la publicidad
- Trabajo de los medios de acuerdo con los intereses nacionales
- Cumplimiento del principio de no al “racismo”.
- “Veracidad” de la información
- Receptividad del medio
- Influencia de un medio
- Alcance del medio
- No denunciar corrupción (Gobernación de Tarija, gestión Lino Condori)
- No informar con fuente reservada (Gobernación de Tarija, gestión Lino Condori)

Y articularon las siguientes frases de justificación:

- “Decir que hay veto (publicitario) no entiendo”. (Presidente Evo Morales).
- Las autoridades del Estado, “puede(n) hacer su publicidad o su propaganda” en el medio de comunicación que quiera. (Presidente Evo Morales).

- “Cualquier (gobierno) puede decir a quién y dónde puede hacer su publicidad, es un derecho de cada uno, no está obligado a hacer su propaganda en algún medio de comunicación y eso he aprendido durante la campaña”. (Presidente Evo Morales).
- “No se puede ser tan ingenuos al creer que existen medios independientes. Decir que hay medios independientes (es) equivocarse. Cada medio tiene su propia alineación”. (Presidente Evo Morales).
- “Hay medios que mienten y hacen política partidaria. que a algunos medios no vamos a dar recursos porque son parapartidos políticos y encima mienten”. (Vicepresidente Álvaro García).
- Gobierno sabrá observar “cuando haya una mentira, falsedad o personas que simplemente hacen campaña política”. (Vicepresidente Álvaro García).
- “Nos van a decir: ‘oiga Presidente, ¿por qué no se da a este medio publicidad?’. Lo decimos abiertamente que hay medios que mienten, hay medios que no informan, sino que hacen política partidaria y por eso como Gobierno no vamos a dar recursos porque son para partidos, políticos y encima mienten y siempre lo hemos confrontado”. (Vicepresidente Álvaro García).
- “A quienes conocen de leyes, conocen de derecho, deberían tener claro que hay discriminación positiva, y la discriminación positiva es en apego a los mandatos constitucionales, a los mandatos que están en la ley es su nivel de audiencia”. (Ministra de Comunicación, Marianela Paco).
- “Hay una actitud de asumir profecía, para lo que es instigar a que haya conflicto y del otro lado, hay una invisibilización de la gestión de Gobierno, esas notas no se reflejan en los medios de comunicación”. (Ministra de Comunicación, Marianela Paco).
- “La veracidad que está deformada. En vez de aproximarse a la verdad de los hechos, dan los sucesos como si fueran

verdad, no se verifica, no hay equilibrio, no hay pluralidad y en varios casos han tenido que disculparse". (Ministra de Comunicación, Marianela Paco).

- "Esperemos que esos medios diversifiquen sus fuentes. **Teníamos la posibilidad de cerrar a los medios que mienten y no difunden la entrega de obras para el pueblo boliviano**, pero no le hemos puesto precio y esta adecuación que durará hasta 2019 (renovación de licencias de radiodifusión), tiene el fin de garantizar la libertad de expresión". (Ministra de Comunicación, Marianela Paco).
- "Denuncian asfixia y al mismo tiempo quieren ser independientes, (...) Si son independientes, no deberían sujetarse a una dependencia económica". (Ministra de Comunicación, Marianela Paco).
- "Otra cosa que me parece importante, nosotros en los contratos de publicidad que hacemos con los canales, las radios y periódicos, etc, etc, estamos poniendo una partecita donde dice "el medio de comunicación se compromete en no calumniar, divulgar y sacar denuncias sin prueba alguna de cualquier autoridad de la Gobernación". (Director de Comunicación de la Gobernación de Tarija, Marco Batallanos, en la gestión de Lino Condori)
- No se puede denunciar bajo secreto sin nombre (declaración referida a casos de corrupción, gobernación de Tarija, gestión Lino Condori)

5. Principios democráticos desconocidos por el veto publicitario

Contados los hechos y las repercusiones, es necesario analizar los principios democráticos violados o ignorados en materia de libertad de expresión debido a que de su existencia, vigencia y práctica dependen el buen funcionamiento de la democracia como sistema de convivencia.

5.1. Principio de participación

La Libertad de Expresión y el Derecho a la Información son derechos fundamentales que una persona posee por su sola condición de miembro de una determinada comunidad política.

Por esta razón, ambos derechos están contemplados en el ámbito del derecho a la participación, imprescindible para la existencia de la democracia.

“Su filosofía política responde al principio de que mediante ellos los ciudadanos participan, directa o indirectamente, en la formación de la voluntad política estatal, exigiendo una serie de prestaciones por parte del Estado, y no una mera abstención del mismo para hacer posible su ejercicio”⁶⁷.

Debido a su gran importancia, la Constitución Política del Estado contempla ambos derechos en 18 artículos⁶⁸. En todos, busca inequívocamente garantizar el Derecho a una comunica-

67 Álvarez Conde Enrique, Curso de Derecho Constitucional, el Estado Constitucional, el Estado de fuentes, los derechos y libertades; editorial Tecnos; Madrid, España, 2009.

68 Art. 20.I. Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable (...) portal y telecomunicaciones.

Art. 21.5. A expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación. Individual o colectiva.

Art. 21.6 A acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente.

Art. 24. Derecho a la Petición

Art. 25.I.III. Inviolabilidad y secreto de las comunicaciones privadas. Prohibido interceptar.

Art. 30.8 Los pueblos indígenas tienen derecho a crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicación propios.

Art.30.15. Consulta Previa, libre e informada (304.21).

Art. 75.II. Los usuarios y consumidores tienen derecho a la información fidedigna sobre las características y contenidos de los productos que consumen y servicios que utilicen.

Art. 103.II. El Estado asumirá como política (...) aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación.

ción pública libre, sin la cual quedarían vaciados de contenido real otros derechos que la constitución consagra.

En este contexto, el constitucionalista español Enrique Álvarez Conde⁶⁹ asegura que sin libertad de expresión quedarían reducidas a formas huera las instituciones representativas y sería absolutamente falseado el principio de legitimidad democrática, base del ordenamiento jurídico y política.

El veto publicitario busca evitar la participación de sectores críticos en la vida política de la sociedad. Su fin es bloquear a personas o grupos sociales que, a través del ejercicio de su libertad de expresión, incomodan a poderes fácticos o legales.

Art. 106. El Estado garantiza los derechos a la Comunicación e Información. Rectificación, Réplica, Sin Censura Previa. Especifica Trabajadores de la Prensa y reconoce Cláusula de Conciencia

Art. 107. Establece una misión a los medios de comunicación social. Diferencia Opinión de Información. Reconoce Códigos de Ética y Ley de Imprenta.

Art. 130.II. La acción de protección de privacidad no procederá para levantar el secreto en materia de prensa.

Art. 137. La Declaración de Estado de Excepción no podrá en ningún caso suspender el derecho a la información.

Art.179. Existirán jurisdicciones especializadas reguladas por ley (Ley de Imprenta, Tribunales de Imprenta)

Art. 237. El procedimiento de calificación de la información reservada estará previsto en la ley.

Art. 242.4 Generar manejo transparente de la información. La información solicitada por el Control Social no podrá denegarse y será entregado de manera completa, veraz, adecuada y oportuna.

Art. 298.II.2. Competencia exclusiva el Régimen general de las comunicaciones y las telecomunicaciones.

Art.343. La Población tiene derecho a la participación en la gestión ambiental a ser consultado e informado previamente sobre el medio ambiente.

69 Álvarez Conde Enrique, Curso de Derecho Constitucional, el Estado Constitucional, el Estado de fuentes, los derechos y libertades; editorial Tecnos; Madrid, España, 2009.

Adquiere su forma más inmoral cuando en este propósito antidemocrático, un gobierno usa el dinero público para obligar con guante de seda a medios de comunicación y periodistas a privar justamente al público de la información plural, crítica y diversa, muy necesarias para que el ciudadano participe en las decisiones públicas.

Cuando un gobierno procede de este modo, ignora que el principal afectado no es la persona o el grupo social bloqueado, sino la comunidad que queda sin la posibilidad de escuchar una voz más o denuncia. Pues, la democracia enseña que la buena información genera un buen juicio y un buen juicio, una buena participación y la participación constituye ciudadanos soberanos capaces de autogobernarse.

En cambio, la mala información (en este caso resultado del miedo a perder los anuncios de un gobierno) genera un mal juicio, una mala decisión y convierte al ciudadano en manipulable, lo que afecta gravemente a la democracia. Por esta razón, el derecho a la información y la libertad de expresión están íntimamente ligados al derecho a la participación.

Y la participación del ciudadano no se restringe a votar en elecciones, debe ser continuo a través del debate político y en todo momento que una decisión gubernamental lo afecte.

Los ciudadanos que eligen tienen que contar con la posibilidad de evaluar las actuaciones de los ciudadanos electos. Y para evaluar, deben ser informados, no desinformados; deben recibir información y no propaganda. Y para recibir información, debe haber medios independientes y libres.

Por este principio, la expresión no debe estar sujeta a restricciones gubernamentales, como el veto publicitario; y el acceso a la información pública, para la toma de decisiones democráticas, no debe ser negado. Suele pasar que un gobierno

que veta publicidad a un medio o periodista, también veta su acceso a fuentes.

La construcción democrática es legítima cuando refleja la opinión pública sin restricciones irracionales porque ayuda a reproducir las condiciones para la vigencia de la libertad de expresión. Es decir, libertad de expresión - democracia- libertad de expresión - democracia.

En definitiva, el derecho humano a la libertad de expresión fortalece el Estado democrático y social de derecho. Por tanto, debe ser garantizado por un gobierno, sea nacional, departamental o local, y no desconocido como sucede cuando aplica el veto publicitario con el fin de evitar el gobierno de la opinión pública.

5.2. Principio de promoción de la verdad

El Derecho a la libertad de expresión es el derecho de las personas a tomar la voz pública y hacer conocer a los demás lo que piensan o la información que poseen⁷⁰, escriben Damián Loretti y Luis Lozano.

En forma complementaria, el derecho a la información se entiende como la facultad de la persona o las personas a acceder, investigar, recibir y difundir información para participar en las decisiones públicas de la comunidad política de la cual es o son parte.

Ambos derechos son instrumentos fundamentales para el descubrimiento o construcción de la verdad.

70 Loretti, Damian y Luis Lozano, "El Derecho a Comunicar". Los conflictos en torno a la libertad de expresión en las sociedades contemporáneas, editorial Siglo XXI, Buenos Aires, Argentina, 2014.

Esta visión abrega en la tradicional teoría del mercado de ideas, la cual sostiene que es necesario permitir la difusión de cualquier tipo de expresión –aún cuando se trate de opiniones declaradamente falsas, irracionales o que inciten al odio, la discriminación o a la violencia – porque sólo de esta manera lo racional-verdadero puede prevalecer y demostrar su validez frente a otros argumentos. Por lo tanto no debe existir intervención alguna –de parte del Estado ni de ningún otro actor social- destinada a condenar o proteger ningún tipo de expresión porque no hay una instancia capaz de arrogarse tal capacidad⁷¹.

Según el profesor Larry Alexander⁷², la libertad de diseminar información y opinión, así como la de criticar las interpretaciones de otros, es un factor clave para evitar concepciones equivocadas sobre los hechos y los valores.

Usar el dinero público para evitar debates o choque de opiniones significa ignorar el principio de la promoción de la verdad. La realidad demuestra que el veto publicitario genera una grave consecuencia: exclusión de voces, que según un gobierno, mienten, pero en realidad pueden tener la verdad o parte de ella.

La búsqueda de la verdad se ve afectada con la amenaza de retirar publicidad estatal a un periodista o medio, si éste da cobertura a determinadas fuentes que pueden contradecir la “verdad” de un poder fáctico o legal. Una acción de este tipo inhibe y causa autocensura que, en última instancia, perjudica a la sociedad.

71 Loretto, Damian y Luis Lozano, “El Derecho a Comunicar”. Los conflictos en torno a la libertad de expresión en las sociedades contemporáneas, editorial Siglo XXI, Buenos Aires, Argentina, 2014

72 Loretto, Damian y Luis Lozano, “El Derecho a Comunicar”. Los conflictos en torno a la libertad de expresión en las sociedades contemporáneas, editorial Siglo XXI, Buenos Aires, Argentina, 2014

El jurista británico Erick Barendt considera que la libertad de expresión conduce a la discusión abierta para arribar a la verdad. Si se toleraran restricciones a las posibilidades de discusión pública, las sociedades no podrían conocer ni publicar hechos demostrables y opiniones valiosas.

Los medios atemorizados por la posibilidad de perder una fuente de ingresos, como representa la propaganda o publicidad estatal, se inhiben de desarrollar este proceso muy necesario para la democracia y afectan al ciudadano que requiere opiniones e informaciones diversas para la toma de mejores decisiones individuales o sociales.

Por supuesto, la verdad no puede ser confundida con la certeza. Es un proceso de construcción y de acercamiento a partir de opiniones diversas y plurales.

5.2. Principio de la tolerancia

La libertad de expresión se convierte con la práctica diaria en una virtud y promueve la autonomía y autorrealización de las personas, y, lo más importante, conduce al desarrollo de actitudes tolerantes hacia las creencias u opiniones de otros. Incluso, ayuda a soportar las críticas, insultos y afirmaciones ofensivas⁷³.

El veto publicitario expresa el desconocimiento de esta virtud esencial para convivir en democracia. Por ello es inconcebible que las autoridades de cualquier gobierno, que por voluntad propia se sometieron al escrutinio de la sociedad, usen el dinero público para evitar la crítica a través de los medios o desde los medios de comunicación independientes.

⁷³ Loretti, Damian y Luis Lozano, "El Derecho a Comunicar". Los conflictos en torno a la libertad de expresión en las sociedades contemporáneas, editorial Siglo XXI, Buenos Aires, Argentina, 2014.

Un presidente, vicepresidente, ministro, comandante de las FFAA, comandante de la Policía o rector de una universidad estatal debe desarrollar esta virtud porque administra dinero público, resuelve asuntos públicos y define el futuro de gobernados. Entonces, debe ser doblemente fiscalizado y criticado.

Bajo esta lógica, Erick Barendt indica que un principio de libertad de expresión significa que la expresión habitualmente debe ser tolerada, aun cuando la conducta que produzca sea comparable con los efectos de la ofensa o daño que bien podrían ser proscritos.

5.3. Principio de pluralidad y diversidad

El profesor de la Universidad de Brown, Alexander Meiklejohn, entiende que la razón de ser de la protección constitucional a la libertad de expresión radica en permitir que los ciudadanos comprendan los procesos políticos a fin de participar de manera efectiva en la construcción cotidiana de la democracia mediante el imperio de la vigilancia a los gobernantes⁷⁴.

Para que esta vigilancia sea efectiva, los ciudadanos deben ser expuestos a una amplia variedad de puntos de vista y posiciones respecto de los diversos temas para poseer la información necesaria.

A tal extremo rige el principio de la pluralidad y diversidad que la democracia soporta y permite la libre circulación de opiniones que atentan contra ella y quieren sepultarla o la critican con acidez, que en lugar de debilitarla la fortalece⁷⁵.

74 Lorette, Damian y Luis Lozano, "El Derecho a Comunicar". Los conflictos en torno a la libertad de expresión en las sociedades contemporáneas, editorial Siglo XXI, Buenos Aires, Argentina, 2014.

75 Lorette, Damian y Luis Lozano, "El Derecho a Comunicar". Los conflictos en torno a la libertad de expresión en las sociedades contemporáneas, editorial Siglo XXI, Buenos Aires, Argentina, 2014.

Barendt también introduce el pluralismo como valor intrínseco de la libertad de expresión, entendido como la variedad en los tipos y modos de concepción de la vida y del bienestar.

La libertad de expresión no solo confiere derechos, sino que refleja los valores plurales de la diversidad y la variedad. Implica la ausencia de censura, pero también significa un debate público robusto. Por otro lado, estas tesis admiten el riesgo de la intervención del gobierno para promover la diversidad, “aun cuando ese paso puede limitar los derechos de algunas personas de diseminar sus puntos de vista”, subraya Barendt.

Bajo la mirada del pluralismo, la libertad de expresión es un bien público. De acuerdo con Loretto, la intervención del Estado en estos casos no debe estar vinculada a la censura, sino al fomento de expresiones que de otro modo no podrían ser conocidas y a las que el público no tendría posibilidad de acceder.

Académico italiano Vincenzo Zeno-Zencovich escribió que “la dimensión política de la libertad de expresión aparenta que esta es esencial para la participación en la vida política de la comunidad, e inevitablemente provoca ideas críticas y argumentaciones concernientes a las autoridades políticas, religiosas y militares”.

En su opinión, se refleja “una demanda por el derecho a diseminar libremente la opinión de cada uno respecto de ideas, instituciones, reglas, condiciones políticas, sociales y económicas y, especialmente, respecto de otras personas y sus actividades”.

“Aunque la libertad de expresión pueda afectar a una ilimitada variedad de asuntos, la existencia de ideas controvertidas, que requieren protección, es la más relevante y crucial. Otras, por ser más comunes y compartidas, ya son libres porque se las acepta en la comunidad”, agrega el italiano.

El veto publicitario busca uniformar pensamientos y la opinión en favor de un gobierno, lo que contradice el principio de la di-

versidad y pluralidad, indispensables para la existencia misma de la democracia.

5.5. Principio de la soberanía

En democracia el poder constituyente se asienta en el pueblo. El estadounidense George Madison sostuvo que es el mismo pueblo el que impone un ambicioso sistema de “gobierno por discusión”, que redundaba en un amplio debate público de las cuestiones institucionales.

Esta mirada obliga al Estado a asumir condiciones de equidad en la participación en ese intercambio y el veto publicitario favorece a un grupo y perjudica a muchos otros.

Esa concepción madisoniana interpreta la “soberanía popular” anclada en el estadio de equidad preliminar y en la función deliberativa de la política y de participación en democracia⁷⁶.

Entonces, el fin de las regulaciones debe ser asegurar la diversidad de puntos de vista en asuntos públicos. De esta manera, se fomenta la decisión soberana de un ciudadano sobre asuntos públicos o temas que afectan sus intereses.

El constitucionalista estadounidense, Cass Sunstein, entiende que el propósito primario de la libertad de expresión es promover la deliberación democrática sobre asuntos de políticas públicas, señala que la protección tiene dos instancias: una más férreamente limitada, vinculada a la discusión de asuntos públicos; y otra más permeable a la regulación, como lo son los medios electrónicos, las campañas, la pornografía o el discurso del odio.

76 Lorette, Damian y Luis Lozano, “El Derecho a Comunicar”. Los conflictos en torno a la libertad de expresión en las sociedades contemporáneas, editorial Siglo XXI, Buenos Aires, Argentina, 2014.

Sunstein señala, en otros términos, que el veto publicitario no debe regular de facto la exclusión de voces sobre asuntos públicos porque atenta contra la dimensión individual y colectiva del soberano, que tiene el derecho y el deber de participar en decisiones sociales y la agenda pública.

6. Normas internacionales y nacionales y derechos violados.

La descripción de los hechos sobre el veto publicitario y la revisión de principios de la libertad de expresión demuestran que el gobierno de Evo Morales Ayma, la Gobernación de Tarija, durante la Gestión de Lino Condori; y otros niveles gubernamentales o de decisión del Estado, mencionados líneas arriba, violaron derechos garantizados en la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales reconocidos por el Estado boliviano.

Pero antes de ingresar de lleno a la parte jurídica, vale la pena recordar las palabras que usaron las autoridades involucradas en el veto publicitario para defender sus decisiones.

6.2. Tratados Internacionales, violados

Se toma en cuenta en una dimensión especial los tratados internacionales en virtud al artículo 410.II de la Constitución, que estipula que el "bloque de constitucionalidad está integrado por los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país"⁷⁷.

⁷⁷ La aplicación de las normas jurídicas se aplicarán por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 1) Constitución Política del Estado; 2) los tratados internacionales, 3) las leyes nacionales (...), 4) los decretos, reglamentos y demás resoluciones..

Al prohibir publicidad o propaganda en determinados medios, pagada con dinero público, los gobiernos señalados infringieron el artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos⁷⁸ que establece:

13. 3. “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o **por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones**”⁷⁹.

El uso arbitrario de la publicidad estatal está contemplado en la frase abierta de este artículo: “**por cualesquiera otros medios**”.

Las autoridades que sostienen y preconizan el veto publicitario están encaminadas “**a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones**”. Quieren que se difundan sólo las ideas y opiniones favorables y no las de crítica.

También quedó desconocido el principio 13 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la Libertad de Pensamiento y Expresión, que señala:

13. “**La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública**; la concesión de prebendas arancelarias; **la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales**; el otorgamiento de frecuencias de radio y

78 El 27 de junio de 1993, presentó en la Secretaría General de la OEA el instrumento de reconocimiento de la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo con los Artículos 45 y 62 de la Convención, http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos_firmas.htm

79 El subrayado corresponde al autor de este libro.

televisión, entre otros, **con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión**".

Los gobiernos mencionados usaron los **recursos de la hacienda pública** para favorecer a medios y periodistas afines a su ideología al realizar **la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial**, sin establecer estándares claramente establecidos en un instrumento jurídico.

Otra norma violada es la Declaración de Chapultepec⁸⁰, que en sus principios 6 y 7 establece:

6. "Los medios de comunicación y los periodistas no deben **ser objeto de discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan**".

7. "Las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación de papel o equipo periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión **y la concesión o supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas**".

Los hechos demuestran que la periodista Amalia Pando, Erbol, Página 7 y otros medios fueron **objeto de discriminaciones** por su independencia y línea crítica. En cambio, los medios afines

⁸⁰ La Declaración de Chapultepec, aprobada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), fue tomada en cuenta en la redacción de principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la Libertad de Pensamiento y Expresión

a los autores del veto fueron **objeto de favores**, entre ellos, por ejemplo, un periódico de Tarija y otro de Sucre.

Además, queda establecido que las autoridades en cuestión realizaron **la concesión o supresión de publicidad estatal para premiar o castigar a medios o periodistas**, entre éstos Correo del Sur de Sucre y otros medios.

El Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue otra de las normas ignoradas⁸¹ en sus numerales 1 y 2.

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende **la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole**, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

No ser molestado significa no sufrir represalias por opinar en contra de algún poder fáctico o funcionario de gobierno. El veto publicitario es una represalia.

La libertad de expresión también comprende, además de recibir e investigar, difundir informaciones u opiniones por cualquier medio. Los medios que trabajan bajo amenaza de perder la publicidad estatal se inhiben o censuran las informaciones u opiniones que contradicen la “verdad oficial”, por tanto violan el derecho de los ciudadanos a **difundir libremente** sus ideas y a recibir también en libertad **ideas de toda índole**.

Las normas internacionales señaladas y que fueron violadas por las autoridades que imponen el veto publicitario tienen su

81 Fue adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI) del 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor **el 23 de marzo de 1976**.

paraguas mayor en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que indica: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; **este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones**, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el **de difundirlas**, sin limitación de fronteras, **por cualquier medio de expresión**”.

6.2. La Constitución y dos leyes, violadas

En el ámbito de la jurisprudencia nacional, fueron violados los siguientes artículos de la Constitución:

Artículo 14.III. “El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos”.

Los hechos demuestran que, en la actual coyuntura, el Estado no garantiza la libertad de expresión en su plenitud, por el contrario, el Estado fue convertido, a través del veto publicitario, en un peligro para el derecho a la información por las razones ya expuestas.

La prohibición de difundir publicidad o propaganda estatal en medios, según el gobierno, “opositores” y de “derecha”, es una discriminación a medios y periodistas por razones ideológicas y políticas y un franco desconocimiento a las garantías establecidas en los tratados internacionales de derechos humanos⁸².

Artículo 21.5. Los bolivianos y las bolivianas tienen los siguientes derechos: “A expresar y difundir libremente pensamientos

⁸² Artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.

u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva”.

Los ciudadanos disidentes, críticos o librepensantes tienen cada vez menos medios tradicionales para difundir sus pensamientos, debido a que los operadores de comunicación se inhiben de invitarlos o entrevistarlos para que el medio donde trabajan no pierdan la publicidad o propaganda estatal.

Esta realidad refleja que las personas librepensantes no expresan **libremente** sus opiniones y menos **“por cualquier medio de comunicación”**.

Artículo 21.6. “A acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente”.

Ante el miedo de perder una fuente económica de sustento, propietarios de medios y periodistas “interpretan” los hechos desde una mirada favorable a las autoridades que presionan a través del veto publicitario, lo que viola la libertad de expresión de la sociedad, que tiene el deber y el derecho de recibir la información de una variedad de fuentes y una pluralidad de miradas para ejercer su derecho a participar en asuntos públicos a través de sus opiniones o decisiones.

En las circunstancias conocidas, no hay libre acceso a la información ni libre interpretación, análisis o comunicación.

Además, algo muy importante, la interpretación, entendida como la lectura de la vida y la realidad desde la formación o cosmovisión de una persona, es la base de la diversidad y pluralismo; y representa el sentido de la democracia, donde, por antonomasia, no puede ni debe haber un pensamiento único y toda forma de buscar ese objetivo, es atentar contra la naturaleza humana.

Artículo 106.I. “El Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información”.

II. “El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa”.

III. El Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información.

Como quedó demostrado en párrafos anteriores, el Estado dejó de ser garante, al menos en este aspecto, y se convirtió en un peligro para la libertad de expresión.

Los ciudadanos críticos, opositores o librepensantes corren el riesgo de ser vetados o restringidos en su derecho a difundir sus pensamientos por decisión de algunos propietarios y periodistas que se inhiben de cristalizar diversidad y pluralismo por miedo a perder el avisaje del Estado o por temor a quedar sin fuente laboral. En otras palabras, estas acciones inducen a la censura previa de fuentes incómodas.

Artículo 106.III. El Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información.

Los autores del veto publicitario afectan este derecho de los periodistas porque en consecuencia a sus acusaciones y justificaciones vetan también su acceso a fuentes oficiales y a la información pública, lo que afecta a su vez a la sociedad, que tiene derecho a recibir información de diversas fuentes para participar.

Paralelamente, exigen a los periodistas no opinar porque, en criterio de los ejecutores del veto publicitario, opinar es hacer política. La libertad de expresión comprende justamente la opinión en sus dos dimensiones: individual y social. La primera está garantizada por este artículo y la segunda por 18 artículos de la Constitución que facultan al ciudadano a recibir opiniones

sin previa censura ni restricciones, salvo aquellas establecidas por ley.

Artículo 242.4: “La participación y el Control implica, además de las previsiones establecidas en la Constitución y la ley: Generar un manejo transparente de la información y del uso de los recursos en todos los espacios de la gestión pública”.

Un ciudadano sin información es un ciudadano sin opinión y si no tiene opinión, no puede participar y si no participa, no ejerce su derecho a la democracia. El veto publicitario es usado para evitar el libre flujo de la información, lo que atenta contra la transparencia.

No puede haber transparencia cuando un gobierno sólo informa lo que le favorece e impide que se informe sobre lo que no le favorece. Las medias verdades son mentiras y las mentiras impiden la transparencia y la democracia es transparencia.

Con veto publicitario de por medio no hay control social, por tanto no hay democracia.

La medida también desconoce el artículo 1 de la Ley de Imprenta que indica: “Todo hombre tiene el derecho de publicar sus pensamientos por la prensa, sin previa censura salvo las restricciones establecidas por la presente ley”.

El veto publicitario no está contemplado como restricción en ninguna ley nacional; es más está prohibido por las normas internacionales descritas.

Finalmente, ignora la Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación, promulgada el 8 de octubre de 2010, que define la discriminación en los siguientes términos: “Toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en razón de sexo, color, edad (...), credo religioso, ideología, filiación política o filosófica...”

Esta norma, que se enmarca en el artículo 14.II de la Constitución⁸³, tipifica además el delito de discriminación y lo incluye en el Código Penal:

Artículo 281 ter. (Discriminación). "La persona que arbitrariamente e ilegalmente obstruya, restrinja, menoscabe, impida o anule el ejercicio de los derechos individuales y colectivos, por motivos de sexo, edad, género, orientación sexual e identidad de género (...) credo religioso, ideología, opinión política o filosófica (...) será sancionado con pena privativa de libertad de uno a cinco años".

Las evidencias demuestran que las autoridades indicadas vetaron publicidad a periodistas y medios con pensamiento político, ideológico y filosófico diferente al suyo. Les negaron su derecho a recibir dinero público por concepto de avisaje estatal.

A la fecha, no hay una sola autoridad procesada por este delito.

7. Consideraciones finales

Descritos los hechos y las normas internacionales y nacionales violadas, es prudente reflexionar sobre los precedentes establecidos por el sistema interamericano de Derechos Humanos, que a partir del año 2000 ha conocido varios casos en materia de libertad de expresión, particularmente en lo concerniente a la relación medios, periodistas, gobernantes y Estado.

83 "El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen (...), credo religioso, ideología, filiación política o filosófica (...) u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad de los derechos de toda persona".

Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) han señalado un rumbo de protección de discursos vinculados a la política, como práctica ligada a la democracia y a la vida pública de la sociedad. También han trazado una línea jurisprudencial de especial consideración al trabajo de periodistas y medios de comunicación, como vehículos imprescindibles de la materialización de la libertad de expresión y del derecho a la información.

Además, tomo en cuenta en esta parte de la investigación los precedentes de la Comisión y la Corte IDH por dos razones:

1. Porque es la instancia que más casos de relaciones jurídico-informativas ha conocido, tratado y resuelto. Por esa razón, la jurisprudencia que generó ha sido tomada muy en cuenta por las instancias judiciales, ejecutivas y legislativas de estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la resolución de casos similares.
- 2, Y porque el artículo 256.I. de la Constitución boliviana indica: "Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre esta". Y el párrafo II agrega: "Los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando éstos prevean normas favorables".

7.1. ¿Por qué el Estado debe garantizar la Libertad de Expresión?

Durante muchos años, en los países democráticos se ha creído que el Estado era el principal peligro para la Libertad de Expresión. Por este miedo colectivo, gran parte de las normas constitucionales han sido redactadas para proteger este derecho de los gobiernos, prohibiéndoles taxativamente cualquier tipo de censura. Sin embargo, con la llegada del Estado Social y Democrático de Derecho, que parió a su vez la Constitución como límite del poder que gobierna precisamente ese Estado, se ha configurado un Estado garante de los derechos constitucionales. Aunque en Bolivia, al menos en este punto, sólo es teoría.

El constitucionalista estadounidense Owen Fiss⁸⁴ atribuye ese viejo pensamiento a algunos liberales que consideraban la libertad de expresión como una "protección del interés individual en la autoexpresión, del derecho del individuo a decir todo cuanto quiera", por lo que "para ellos el Estado es la amenaza contra la que el individuo debe ser protegido".

En el nuevo escenario jurídico, Fiss entiende la libertad en términos más sociales. "La libertad de expresión es un derecho público -un instrumento de la autodeterminación colectiva- y el Estado es presentado bajo una nueva forma, posiblemente como un amigo de la libertad. Es verdad que el Estado puede interferir con la fuerza del debate público y, en consecuencia, actuar como un enemigo de la libertad, pero no hay razón para suponer que así lo hará, y podemos inclinarnos a pensar que, en efecto, puede actuar promoviendo la causa de la libertad", subraya.

La Constitución boliviana va en este sentido, así lo establecen los artículos 14.III y 256.I, descritos líneas más arriba.

Es decir, el Estado boliviano está obligado a ser garante del derecho humano a la libertad de expresión, con todo lo que

84 Fiss, Owen; *La ironía de la Libertad de Expresión*; editorial gedisa; Barcelona, España; 1999

implica esta definición, y no un infractor. En consecuencia, no puede ni debe favorecer, vía publicidad estatal sólo a los medios de comunicación afines al partido de gobierno y castigar a través del veto publicitario a los periodistas o medios independientes o críticos.

Garantizar libertad de expresión significa garantizar diversidad y pluralismo; no apagar la diversidad y matar la pluralidad aniquilando medios de expresión contrarios al gobierno de turno y potenciando a los suyos.

La opinión consultiva 5/85 emitida por la Corte IDH, el máximo tribunal regional, establece que el derecho a la libertad de expresión no es declamativo y que implica contar con las herramientas para hacer efectivo su ejercicio.

¿Quién debe dotar de esas herramientas a los ciudadanos? El Estado, debido a que hay un bien superior que está por encima de la ideología de cualquier gobierno: la democracia.

Con esta visión, en países de Europa occidental hay incluso subsidios directos destinados a fomentar el pluralismo y la diversidad de voces.

El abogado y sociólogo argentino, Roberto Gargarella⁸⁵, indicó en esta senda que “respetar la libertad de expresión exige acciones públicas destinadas a que se escuchen voces diferentes, que faciliten el acceso a la escena pública de puntos de vista opuestos, que rompan una inercia que castigan a quienes están peor por razones completamente ajenas a su responsabilidad”.

A principios de Siglo, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión pidió a los estados eliminar cualquier tipo de discriminación en esta materia para fortalecer las democracias. “Es deber del Estado garantizar la igualdad de oportunidades a

85 Citado por Damián Loretti y Luis Lozano; “El derecho a comunicar”, editorial Siglo XXI; Buenos Aires, Argentina, 2014.

todas las personas para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, eliminando todo tipo de medidas que discriminen a un individuo o grupo de personas en su participación igualitaria y plena de la vida política, económica y social de su país (nadie puede ser discriminado ni por ser pobre ni por pensar diferente). Este derecho garantiza una voz informada para todas las personas, condición indispensable para la subsistencia de la democracia”, manifestó en su Informe del año 2000.

8. ¿Por qué el Estado debe proteger a medios y periodistas?

Concertemos que la democracia es el gobierno de la opinión pública y ésta se construye a través de la libertad de expresión, que se cimienta en la diversidad y pluralidad. Cualquier interferencia gubernamental para quebrar la opinión pública libre, que es una institución política fundamental, menoscaba un requisito esencial del funcionamiento del Estado Democrático.

Dentro esta premisa, un gobierno no solo no debe interferir, sino adoptar medidas correctoras para garantizar igualdad, diversidad y pluralismo en la construcción de la opinión pública. Los gobiernos democráticos constituyen medios de comunicación social del Estado justamente para corregir las desigualdades y no para profundizarlas a través de la propaganda. Dicho de otro modo, los medios de comunicación son esenciales para el buen funcionamiento de la democracia.

Será que por eso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ha dudado en calificar a los medios de comunicación de “perro guardián” de la democracia. Esta calificación se entiende más cuando el Parlamento, o en el caso boliviano Asamblea Legislativa, no funciona como instancia de control del poder; entonces, esta función democrática es ejercida por grupos sociales a través de los medios de comunicación social y los

profesionales de la información. Esta es la explicación por la cual, a veces, las relaciones entre la prensa y el poder se tornan complejas o rudas; sin embargo, es uno de los elementos clave de todo sistema democrático.

El Tribunal Constitucional de España destacó, en su sentencia del 16 de marzo de 1981, la importancia de los medios de comunicación y los periodistas con las siguientes palabras: "La preservación de esta comunicación pública libre sin la cual no hay sociedad libre ni, por tanto, soberanía popular, exige la garantía de ciertos derechos fundamentales comunes a todos los ciudadanos y la interdicción con carácter general de determinadas actuaciones del poder (art. 20, apartados 2 y 5), pero también una especial consideración a los medios que aseguren la comunicación social y, en razón de ello, a quienes profesionalmente le sirven"⁸⁶.

El Tribunal Constitucional de España reforzó esta línea jurisprudencial en su sentencia 165/1987, de 27 de octubre, que estableció que el valor preferente que se predica del derecho a la Libertad de Expresión "alcanza el nivel máximo cuando la libertad es ejercida por los profesionales de la información a través de vehículos institucionalizados de formación de la opinión pública, que es la prensa, entendida en su más amplia acepción".

Esas dos sentencias constituyen a los medios de comunicación en los espacios naturales de circulación de opiniones e informaciones, por tanto, escenarios por antonomasia de la opinión pública y el control social. Y los periodistas son los profesionales que hacen posible, regulados por normas legales y éticas, el desarrollo de esos espacios y escenarios democráticos.

86 Álvarez Conde, Enrique; Curso de Derechos Constitucional; editorial Tecnos; Madrid, España; 2009.

En el fallo “Ríos y otros c. Venezuela”, la Corte IDH ilustró el rol clave del Estado como garante de la pluralidad de voces y el equilibrio informativo:

“Dada la importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática y la responsabilidad que entraña para los medios de comunicación social y para quienes ejercen profesionalmente estas labores, el Estado debe minimizar las restricciones a la información y equilibrar en la mayor medida posible, la participación de las distintas corrientes en el debate público e impulsar el pluralismo informativo”

Es más, la Corte IDH señaló que los medios deben “ser instrumentos de la libertad de expresión y no vehículos para restringirla, razón por la cual es indispensable que recojan las más diversas informaciones y opiniones”.

Después de subrayar que la libertad de expresión se constituye en una piedra angular de la existencia misma de la democracia, añadió que “es precondition de la democracia” la discusión libre y abierta de los asuntos públicos, por lo que “resulta necesario garantizar el acceso igualitario de todos los grupos y personas a los medios masivos de comunicación”.

Los motivos democráticos de alta consideración hacia los medios y periodistas se pueden resumir en los siguientes puntos:

- Los medios de comunicación son espacios fundamentales para la difusión de la información amplia sobre asuntos de interés público que afectan a la sociedad.
- Por tanto, la libertad de expresión otorga, tanto a los directivos de medios de comunicación como a los periodistas que laboran en ellos, el derecho de investigar y difundir por esa vía hechos y opiniones de interés público.
- El procesamiento o el veto publicitario a medios y periodistas por el mero hecho de investigar y publicar información

de interés público, viola la libertad de expresión al desestimular el debate público sobre asuntos de interés para la sociedad y genera un efecto de autocensura.

8.1. Protección a la libertad e independencia de los periodistas

La Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló en 1985 que “son los medios de comunicación social los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad. Para ello es indispensable, inter alia, la pluralidad de medios, la prohibición de todo monopolio respecto de ellos, cualquiera sea la forma que pretenda adoptar, y la garantía de protección a la libertad e independencia de los periodistas”⁸⁷.

Por naturaleza jurídica, la libertad de expresión debe poder ejercerse en su faz individual, que se entiende como el derecho de cada persona a utilizar cualquier medio apropiado para difundir sus opiniones; y en su faz social, que consiste en satisfacer la necesidad de todos los ciudadanos de recibir información y opiniones diversas. En ambos casos, la función de medios y periodistas es determinante.

Esta doble dimensión de la Libertad de Expresión fue comprendida a cabalidad por la Corte Suprema de Argentina que, en una de sus sentencias, subrayó: “a diferencia de lo que sucede en la libertad de expresión en su dimensión individual, donde la actividad regulatoria del Estado es mínima, la faz colectiva

87 Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión, <http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/MARCO%20JURIDICO%20INTERAMERICANO%20DEL%20DERECHO%20A%20LA%20LIBERTAD%20DE%20EXPRESION%20ESP%20FINAL%20portada.doc.pdf>

exige una protección activa por parte del Estado, por lo que su intervención aquí se intensifica. Los medios de comunicación tienen un rol relevante en la formación del discurso público, motivo por el cual el interés del Estado en la regulación resulta incuestionable”.

En otros términos, la realización de la dimensión colectiva de la libertad de expresión pasa por medios libres de condiciones ideológicas o presiones económicas como el veto publicitario. No sólo eso, depende de la prohibición de monopolios y oligopolios ideológicos que son fomentados por la propaganda oficialista, pagada con recursos públicos.

Pues, se comprende el monopolio u oligopolio no solo en sentido de propiedad, sino ideológico. Es decir, puede haber medios con muchos propietarios, pero si tienen la misma tendencia ideológica, se perderá una cualidad esencial de la democracia: el pluralismo. Para evitar este peligro, está prohibido que un gobierno alimente un oligopolio de medios afines con dinero público a través de la publicidad estatal.

Hay que recordar que la concentración de la propiedad de medios de comunicación tiene como correlato la homogeneización de contenidos y la marginación de las voces disidentes, por tanto se constituye en un atentado a la independencia y libertad de medios y periodistas.

Ante este riesgo, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos apunta a construir sistemas de medios que garanticen el derecho del público a recibir la máxima diversidad posible de información a resguardo tanto de la intervención gubernamental como de los intereses comerciales de las empresas del sector⁸⁸.

88 Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión, <http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/MARCO%20JURIDICO%20INTERAMERICANO%20DEL%20DE->

El uso de la publicidad estatal para castigar o premiar medios y periodistas tiene como fin restringir el derecho del público a recibir la máxima diversidad posible de información y de opiniones, entonces es antidemocrático.

8.2. Las opiniones que chocan o irritan a funcionarios no deben causar veto publicitario

En vista de que la libertad de expresión es un baluarte del Estado de Derecho, la Corte IDH indicó en 2008 que “en la arena del debate sobre temas de alto interés público, no sólo se protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población. Así lo exigen el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe una sociedad democrática”⁸⁹.

En este sentido, se ha señalado la especial importancia que tiene proteger la libertad de expresión “en lo que se refiere a las opiniones minoritarias, incluyendo aquéllas que ofenden, resultan chocantes o perturban a la mayoría”; y se ha enfatizado que las restricciones a la libertad de expresión “no deben ‘perpetuar los prejuicios ni fomentar la intolerancia’”⁹⁰.

RECHO%20A%20LA%20LIBERTAD%20DE%20EXPRESION%20ESP%20FINAL%20portada.doc.pdf

89 Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión, <http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/MARCO%20JURIDICO%20INTERAMERICANO%20DEL%20DE-RECHO%20A%20LA%20LIBERTAD%20DE%20EXPRESION%20ESP%20FINAL%20portada.doc.pdf>

90 Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión, <http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/MARCO%20JURIDICO%20INTERAMERICANO%20DEL%20DE-RECHO%20A%20LA%20LIBERTAD%20DE%20EXPRESION%20ESP%20FINAL%20portada.doc.pdf>

En igual orden de ideas, resulta claro que el deber de no interferir con el derecho de acceso a la información de todo tipo, se extiende a la circulación de información, ideas y expresiones que puedan o no contar con el beneplácito personal de quienes representan la autoridad estatal en un momento dado⁹¹.

En estas condiciones democráticas, la prensa debe informar de manera amplia sobre cuestiones de interés público que afecten bienes sociales, y los funcionarios deben rendir cuentas de su actuación en el ejercicio de sus tareas públicas.

La Corte IDH remarcó que cuando se trata de expresiones referidas a asuntos de indudable interés público y la persona afectada es un funcionario público, una figura pública o un particular que hubiera intervenido en cuestiones de esta índole, la capacidad de los Estados de aplicar sanciones penales debe excluirse, al tiempo que deben reducirse al mínimo posible las sanciones civiles para evitar todo efecto inhibitorio en el ejercicio de la libertad de expresión.

“No puede haber responsabilidad alguna por la crítica o la disidencia, aun cuando sean expresadas ardorosamente, ya que toda sociedad plural y diversa necesita del debate democrático, el que se nutre de las opiniones teniendo como meta la paz social”, señaló el tribunal internacional y agrega que “los debates ardorosos y las críticas penetrantes no deben causar temor, ya que son el principal instrumento para fortalecer una democracia deliberativa, que es el principal reaseguro contra las decisiones arbitrarias y poco transparentes”.

Esta jurisprudencia prohíbe a un Presidente, Vicepresidente, Ministro o cualquier funcionario vetar publicidad estatal a los

91 Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión, <http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/MARCO%20JURIDICO%20INTERAMERICANO%20DEL%20DERECHO%20A%20LA%20LIBERTAD%20DE%20EXPRESION%20ESP%20FINAL%20portada.doc.pdf>

medios por canalizan “debates ardorosos y críticas penetrantes” u opiniones chocantes, irritantes e inquietantes.

8.3. Discursos protegidos por la Corte IDH

A fin de evitar cualquier atentado gubernamental a la libertad de expresión, alegando insultos o ataques verbales, el sistema interamericano ha remarcado la importancia del derecho a difundir las expresiones habladas o escritas de pensamientos, informaciones, ideas u opiniones, por los medios de difusión que se elijan para comunicarlas al mayor número posible de destinatarios.

En este sentido, la Corte Interamericana ha enfatizado que:

- a. La libertad de expresión no se agota en el derecho abstracto a hablar o escribir, sino que abarca inseparablemente el derecho a la difusión del pensamiento, la información, las ideas y las opiniones por cualesquiera medios apropiados que se elijan, para hacerlo llegar al mayor número de destinatarios;
- b. Para garantizar efectivamente esta libertad, el Estado no sólo debe proteger el ejercicio del derecho a hablar o escribir las ideas y la información, sino que está en el deber de no restringir su difusión a través de la prohibición o regulación desproporcionada de los medios escogidos para que los destinatarios puedan recibirlas; y
- b. Cuando la Convención Americana establece que la libertad de expresión comprende el derecho a difundir informaciones e ideas “por cualquier [...] procedimiento”, está estableciendo que la expresión y la difusión de pensamientos e ideas son indivisibles, y en ese sentido cualquier limitación de los medios y posibilidades de difusión de la expresión es, directamente y en la misma

medida, una afectación de la libertad de expresión –lo cual implica, entre otras, que las restricciones a los medios de comunicación son también restricciones de la libertad de expresión⁹².

El veto publicitario es una forma invisible, pero muy efectiva, de restringir la difusión de ideas que incomodan a un gobierno que, paradójicamente, usa dinero público para atentar contra la libertad de expresión del mismo público.

Justamente para evitar premios o castigos por la cobertura informativa o la difusión de opiniones, el artículo 13 de la Convención Americana protege con especial atención ciertos tipos de discurso importantes para el ejercicio de los demás derechos humanos o para la consolidación, funcionamiento y preservación de la democracia.

En la jurisprudencia interamericana, tales modos de discurso especialmente protegidos son los tres siguientes:

- a. El discurso político y sobre asuntos de interés público;
- b. El discurso sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y sobre candidatos a ocupar cargos públicos; y
- c. El discurso que configura un elemento de la identidad o la dignidad personales de quien se expresa⁹³.

92 Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión, <http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/MARCO%20JURIDICO%20INTERAMERICANO%20DEL%20DERECHO%20A%20LA%20LIBERTAD%20DE%20EXPRESION%20ESP%20FINAL%20portada.doc.pdf>

93 Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión, <http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/MARCO%20JURIDICO%20INTERAMERICANO%20DEL%20DERECHO%20A%20LA%20LIBERTAD%20DE%20EXPRESION%20ESP%20FINAL%20portada.doc.pdf>

Por eso mismo, la jurisprudencia interamericana ha definido la libertad de expresión como “el derecho del individuo y de toda la comunidad a participar en debates activos, firmes y desafiantes respecto de todos los aspectos vinculados al funcionamiento normal y armónico de la sociedad”.

Ha enfatizado que la libertad de expresión es una de las formas más eficaces de denuncia de la corrupción; y ha señalado que en el debate sobre asuntos de interés público, se protege tanto la emisión de expresiones inofensivas y bien recibidas por la opinión pública, como aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos, a los candidatos a ejercer cargos públicos, o a un sector cualquiera de la población⁹⁴.

En consecuencia, las expresiones, informaciones y opiniones atinentes a asuntos de interés público, al Estado y sus instituciones, gozan de mayor protección bajo la Convención Americana, lo cual implica que el Estado debe abstenerse con mayor rigor de establecer limitaciones a estas formas de expresión, y que las entidades y funcionarios que conforman el Estado, así como quienes aspiran a ocupar cargos públicos, en razón de la naturaleza pública de las funciones que cumplen, deben tener un mayor umbral de tolerancia ante la crítica⁹⁵.

En una sociedad democrática, dada la importancia del control de la gestión pública a través de la opinión, hay un margen reducido a cualquier restricción del debate político o de cuestio-

94 Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión, <http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/MARCO%20JURIDICO%20INTERAMERICANO%20DEL%20DERECHO%20A%20LA%20LIBERTAD%20DE%20EXPRESION%20ESP%20FINAL%20portada.doc.pdf>

95 Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión, <http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/MARCO%20JURIDICO%20INTERAMERICANO%20DEL%20DERECHO%20A%20LA%20LIBERTAD%20DE%20EXPRESION%20ESP%20FINAL%20portada.doc.pdf>

nes de interés público. En otras palabras, no se justifica el veto publicitario asumido por un funcionario de gobierno contra un medio o un periodista por canalizar cualquiera de los tipos de discursos especialmente protegidos.

La jurisprudencia interamericana también ha señalado que:

- La libertad de expresión comprende el derecho a hacer denuncias sobre violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios públicos;
- Que la obstrucción de este tipo de denuncias o su silenciamiento conlleva una violación de la libertad de expresión en sus dimensiones individual y colectiva;
- Y que, en una sociedad democrática, la prensa tiene derecho a informar libremente y criticar al gobierno, y el pueblo tiene derecho a ser informado sobre distintas visiones de lo que ocurre en la comunidad.
- En particular, se encuentran especialmente protegidas las denuncias por las violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes del Estado.

En resumen, es injustificable que un gobernante o funcionario prohíba difundir publicidad en un medio porque éste denunció violaciones a los derechos humanos de un sector social, como por ejemplo los indígenas del TIPNIS, o porque denunció corrupción o porque criticó un desacierto de gestión de gobierno.

8.4. Prohibido discriminar a periodistas por su línea política

La Corte Interamericana ha indicado, desde principios de siglo, que un tratamiento diferenciado por razón de la pertenencia de una persona a un medio de comunicación que tenga una línea editorial crítica o independiente, puede quedar comprendido

en la categoría prohibida de trato diferenciado por “opiniones políticas”, consagrada en el artículo 1.1 de la Convención Americana.

Asimismo, ha señalado que el uso de tal categoría (“opiniones políticas”) no depende necesariamente de que la persona realmente hubiere expresado directamente posiciones críticas o disidentes, o incluso de que efectivamente compartiera las posiciones editoriales del medio en el cual trabaja. A este respecto, basta que quien efectúa el trato diferenciado identifique a la persona afectada con el medio crítico y, por esta razón, la discrimine⁹⁶.

Las discriminaciones generalmente conllevan otras prohibiciones, por ejemplo, el acceso del periodista, considerado “opositor”, a fuentes oficiales; y del “paraestatal”, a fuentes opositores. Estas restricciones afectan más que al periodista al titular del derecho a la información, el ciudadano, quien se ve privado de recibir informaciones de fuentes diversas y plurales.

8.5. Importancia del periodismo para la libertad de expresión

El periodismo, en el contexto de una sociedad democrática, representa una de las manifestaciones más importantes de la libertad de expresión e información. Las labores periodísticas y las actividades de la prensa son elementos fundamentales para el funcionamiento de las democracias, ya que son los periodistas y los medios de comunicación quienes mantienen informada a la sociedad sobre lo que ocurre y sus distintas

96 Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión, <http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/MARCO%20JURIDICO%20INTERAMERICANO%20DEL%20DERECHO%20A%20LA%20LIBERTAD%20DE%20EXPRESION%20ESP%20FINAL%20portada.doc.pdf>

interpretaciones, condición necesaria para que el debate público sea fuerte, informado y Vigoroso⁹⁷.

También es claro que una prensa independiente y crítica es un elemento fundamental para la vigencia de las demás libertades que integran el sistema democrático.

Para la Corte IDH, la importancia de la prensa y del status de los periodistas se explica, en parte, por la indivisibilidad entre la expresión y la difusión del pensamiento y la información, y por el hecho de que una restricción a las posibilidades de divulgación representa, directamente y en la misma medida, un límite al derecho a la libertad de expresión, tanto en su dimensión individual como en su dimensión colectiva.

De allí que, en criterio de la Corte Interamericana, las restricciones a la circulación de información por parte del Estado deban minimizarse, en atención a la importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática y la responsabilidad que tal importancia impone a los periodistas y comunicadores sociales.

El vínculo directo que tiene con la libertad de expresión diferencia al periodismo de otras profesiones. En opinión de la Corte Interamericana, el ejercicio del periodismo implica que una persona se involucre en actividades definidas o comprendidas en la libertad de expresión que la Convención Americana protege específicamente, las cuales están garantizadas mediante un derecho que coincide en su definición con la actividad periodística.

97 Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión, <http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/MARCO%20JURIDICO%20INTERAMERICANO%20DEL%20DERECHO%20A%20LA%20LIBERTAD%20DE%20EXPRESION%20ESP%20FINAL%20portada.doc.pdf>

Así, el ejercicio profesional del periodismo no puede diferenciarse del ejercicio de la libertad de expresión—por ejemplo atendiendo al criterio de la remuneración—: son actividades “evidentemente imbricadas”, y el periodista profesional es simplemente quien ejerce su libertad de expresión en forma continua, estable y remunerada⁹⁸.

Por su estrecha relación con la libertad de expresión, el periodismo no puede concebirse simplemente como la prestación de un servicio profesional al público mediante la aplicación de conocimientos adquiridos en una universidad, o por quienes están inscritos en un determinado colegio profesional (como podría suceder con otros profesionales), pues el periodismo se vincula con la libertad de expresión inherente a todo ser humano.

En términos de la Corte Interamericana, los periodistas se dedican profesionalmente al ejercicio de la libertad de expresión definida expresamente en la Convención Americana, a través de la comunicación social.

En tal sentido, los relatores para la libertad de expresión de la ONU, la OSCE y la OEA afirmaron en su Declaración Conjunta de 1999 que, “los medios de comunicación independientes y pluralistas son esenciales para una sociedad libre y abierta y un gobierno responsable”.

8.6. Responsabilidad inherente al ejercicio del periodismo

En primer lugar, se ha reconocido que la libertad de expresión otorga, tanto a los directivos de medios de comunicación

⁹⁸ Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión, <http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/MARCO%20JURIDICO%20INTERAMERICANO%20DEL%20DERECHO%20A%20LA%20LIBERTAD%20DE%20EXPRESION%20ESP%20FINAL%20portada.doc.pdf>

como a los periodistas que laboran en ellos, el derecho a investigar y difundir por esa vía hechos de interés público; y que en una sociedad democrática, la prensa tiene derecho a informar libremente sobre las actividades estatales, y criticar al gobierno⁹⁹.

En tal sentido se pronunciaron también los relatores para la libertad de expresión de la ONU y la OEA en su Declaración Conjunta de 2003, en la cual manifestaron estar “conscientes del importante papel de control que desempeñan los medios de comunicación y de la importancia para la democracia y para la sociedad como un todo de un periodismo investigativo activo y vibrante”, y afirmaron, en consecuencia:

- (i) Que “los trabajadores de los medios de comunicación que investigan casos de corrupción o actuaciones indebidas no deben ser blanco de acoso judicial u otro tipo de hostigamiento como represalia por su trabajo”,
- (ii) Y que “se debe impulsar a los propietarios de los medios de comunicación para que provean del apoyo apropiado a los periodistas comprometidos con el periodismo investigativo”.

La garantía de la protección de la libertad e independencia de los periodistas es una de las condiciones que se deben cumplir para que los medios de comunicación sean en la práctica verdaderos instrumentos de la libertad de expresión, y no vehículos para restringirla, afirmó la Corte IDH.

En términos de la Corte Interamericana, “la libre circulación de ideas y noticias no es concebible sino dentro de una plurali-

⁹⁹ Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión, <http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/MARCO%20JURIDICO%20INTERAMERICANO%20DEL%20DERECHO%20A%20LA%20LIBERTAD%20DE%20EXPRESION%20ESP%20FINAL%20portada.doc.pdf>

dad de fuentes de información y del respeto a los medios de comunicación. Pero no basta para ello que se garantice el derecho de fundar o dirigir órganos de opinión pública, sino que es necesario también que los periodistas y, en general, todos aquellos que se dedican profesionalmente a la comunicación social puedan trabajar con protección suficiente para la libertad e independencia que requiere este oficio”.

Los medios de comunicación, por su parte, también son titulares del derecho a la independencia y a estar libres de presiones de cualquier índole. Es en este sentido que el principio 13 de la Declaración de Principios establece que, “los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”.

El veto publicitario es una forma de presión que busca acabar con la independencia y libertad de periodistas y medios de comunicación.

8.7. Los funcionarios pueden criticar, pero no atacar

Asimismo, la Corte Interamericana ha indicado que los funcionarios públicos deben abstenerse de hacer declaraciones que, en el marco de un contexto de polarización social, aumenten el riesgo de periodistas y medios de sufrir agresiones por parte de terceros.

A este respecto, la Corte Interamericana ha indicado que, “en el marco de sus obligaciones de garantía de los derechos reconocidos en la Convención Americana, el Estado debe abstenerse de actuar de manera tal que propicie, estimule, favorezca o profundice esa vulnerabilidad, y ha de adoptar, cuando sea pertinente, medidas necesarias y razonables para prevenir o proteger los derechos de quienes se encuentren en

tal situación así, como en su caso, investigar hechos que los perjudiquen”.

La jurisprudencia del sistema interamericano tiene como fin evitar actos de intimidación o ataques físicos en contra de los periodistas porque limitan la libertad de expresión no sólo de los periodistas sino de todos los ciudadanos, porque producen un efecto amedrentador sobre el libre flujo de información.

Una sociedad no debería tener temor de generar información sobre los abusos de poder, actividades ilegales u otras irregularidades contra la sociedad. Los Estados están obligados a tomar medidas efectivas para evitar dichos intentos ilegales de limitar la libertad de expresión.

Al respecto, en los casos Ríos y otros Vs Venezuela y Perozo y otros Vs. Venezuela, la Corte Interamericana sostuvo que, “el ejercicio efectivo de la libertad de expresión implica la existencia de condiciones y prácticas sociales que lo favorezcan”.

La Corte IDH se refiere a condiciones de facto que colocan, directa o indirectamente, en situación de riesgo o mayor vulnerabilidad a los periodistas, como sucedió recientemente en el conflicto Cooperativistas Mineros y Gobierno, donde fueron atacados físicamente trabajadores de medios.

La Corte Interamericana también ha encontrado que las declaraciones de altos funcionarios públicos contra medios de comunicación y periodistas por razón de su línea editorial, pueden conducir a aumentar el riesgo propio de la actividad de periodismo.

“Si bien es cierto que existe un riesgo intrínseco a la actividad periodística, las personas que trabajan para determinado medio de comunicación social pueden ver exacerbadas las situaciones de riesgo a las que normalmente se verían enfrentados, si ese medio es objeto de discursos oficiales que puedan provocar o sugerir acciones o ser interpretados por funcionarios

públicos o por sectores de la sociedad como instrucciones, instigaciones, o de cualquier forma autorizaciones o apoyos, para la comisión de actos que pongan en riesgo o vulneren la vida, seguridad personal u otros derechos de personas que ejercen labores periodísticas o de quienes ejercen su libertad de expresión”¹⁰⁰.

Asimismo, ha indicado que tales declaraciones de funcionarios públicos pueden comprometer la responsabilidad del Estado, puesto que “las declaraciones de altas autoridades estatales pueden servir no sólo como admisión de la conducta del propio Estado, sino también generar obligaciones a éste”.

En los casos Ríos y otros Vs. Venezuela y Perozo y otros Vs. Venezuela, al referirse a la protección de los periodistas, directivos y demás miembros de los medios de comunicación que habían sido objeto de los pronunciamientos oficiales, tanto la Corte Interamericana como la CIDH consideraron que una medida que habría contribuido a la protección de los las víctimas, y que no se había presentado, habría sido un rechazo público y enérgico de las agresiones que contra ellos se habían llevado a cabo.

Los medios y periodistas pueden ser criticados por los gobernantes y por la gente, es más, deben ser criticados, pero no pueden ser atacados desde la inmunidad e impunidad del poder porque puede ser interpretado como instigación a atacar contra la integridad física de un comunicador o la infraestructura de un medio.

La Corte Interamericana prohíbe las descalificaciones de un gobernante porque pueden contribuir a acentuar un ambiente

100 Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión, <http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/MARCO%20JURIDICO%20INTERAMERICANO%20DEL%20DERECHO%20A%20LA%20LIBERTAD%20DE%20EXPRESION%20ESP%20FINAL%20portada.doc.pdf>

de hostilidad, intolerancia o animadversión por parte de sectores de la población hacia periodistas e incluso sus familiares, lo que puede terminar en agresiones o peores consecuencias.

Los ataques de funcionarios también limitan, restringen o anulan las posibilidades de los periodistas de buscar y recibir información, y, paralelamente, constituyen faltas a las obligaciones estatales de prevenir hechos y proteger derechos.

En definitiva, los gobernantes están para garantizar el derecho humano de la libertad de expresión, no para desconocerlo, violarlo o inducir a hacerlo. Es incoherente, usar la libertad de expresión para restringir un derecho humano.

En consecuencia, los funcionarios públicos no pueden, por ejemplo, vulnerar el principio de presunción de inocencia al imputar a medios de comunicación o a periodistas, delitos que no han sido investigados y definidos judicialmente.

Por ello mismo, un gobernante tiene el deber de asegurarse que con sus pronunciamientos no está lesionando los derechos de quienes contribuyen a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento, tales como periodistas y medios de comunicación.

A este respecto, la Corte Interamericana ha indicado que los funcionarios deben atender al contexto en el cual se expresan para asegurarse de que sus expresiones no constituyen, “formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento”.

Este deber de los funcionarios se acentúa en situaciones en las que se presenta, “conflictividad social, alteraciones del orden público o polarización social o política”, debido a los “riesgos que pueden implicar para determinadas personas o grupos en un momento dado”.

Finalmente, para evitar el uso arbitrario del dinero público contra la libertad de expresión y preservar la democracia con energía deliberante, la Corte Interamericana exige a los estados contar con un organismo técnico, independiente e imparcial para que la publicidad oficial sea asignada con políticas transparentes y que los medios públicos deben dar voz y satisfacer las necesidades de información de todos los sectores de la sociedad.

9. Conclusiones

1. Los hechos reflejados y derechos señalados demuestran que el gobierno de Evo Morales y otros gobiernos regionales usaron y usan dinero público para atentar contra la libertad de expresión y el derecho a la información de los ciudadanos bolivianos.
2. El Poder Ejecutivo utilizó y utiliza la publicidad estatal para premiar a medios de comunicación de línea gubernamental.
3. El Poder Ejecutivo utiliza la publicidad estatal para castigar a medios independientes, "opositores" o críticos.
4. La prohibición de difundir publicidad o propaganda estatales en determinados medios es un mecanismo económico que busca la censura y autocensura de medios y periodistas, lo que afecta el derecho a la información de la sociedad.
5. El gobierno viola tratados internacionales, la Constitución y normas nacionales. Por tanto, el Estado incumple su deber de garantizar la libertad de expresión en los términos contruidos por la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

6. El gobierno central usó su poder, en el caso de Erbol, para amedrentar a ONG y empresa privada con el fin de evitar que estos difundan publicidad social o hagan proyectos sociales en ese medio.
7. El gobierno central usó su poder atemorizante con el objetivo de impedir que el titular de la libertad de expresión, el ciudadano, aporte su dinero para sostener económicamente un medio independiente como Erbol.

Este libro
se terminó de imprimir
en el mes de noviembre de 2016 en los
talleres gráficos de Imprenta Imago Mundi
Santa Cruz de la Sierra
Bolivia